

CICLOS DE ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN CENTROAMÉRICA: UN ARGUMENTO A FAVOR DE HISTORIZAR Y UN ESTUDIO DE CASO SOBRE EL BAJO AGUÁN, HONDURAS

*Marc Edelman
Andrés León*

Recibido: 18/02/2014 Aceptado: 15/05/2014

Resumen

La falta de perspectiva histórica en la mayoría de los estudios sobre la nueva ola de acaparamiento de tierras lleva a los investigadores a subestimar hasta qué punto las relaciones sociales preexistentes producen los espacios rurales donde suceden las actuales transacciones de tierras. Así, la historización del acaparamiento de tierras es esencial para entender los antecedentes, definir bases para poder calcular los impactos y devolver la "agencia" a las distintas clases agrarias en disputa. En Centroamérica, cada uno de los ciclos de acaparamiento de tierras –reformas liberales, concesiones bananeras y contrarreformas agrarias– tuvo un fuerte impacto en el período que les sucedió. En la región del Bajo Aguán en Honduras –un centro para la reforma y luego para la contrarreforma agraria en Centroamérica– conflictos violentos por la tierra han sido creados materialmente por repertorios de conflicto y represión, tanto de grupos campesinos, como por terratenientes y el Estado, así como por un conjunto de memorias de desposesión campesinas.

Palabras clave: desposesión; acaparamiento de tierras; reforma agraria; Centroamérica; Honduras.

Abstract

The lack of historical perspective in many recent studies of land grabbing leads researchers to ignore or underestimate the extent to which preexisting social relations shape rural spaces in which contemporary land deals occur. Bringing history back in to land grabbing research is essential for understanding antecedents, establishing baselines to measure impacts, and restoring the agency of contending agrarian social classes. In Central America, each of several cycles of land grabbing–Liberal reforms, banana concessions, and agrarian counter-reform–profoundly shaped the period that succeeded it. In the BajoAguán region of Honduras—a center of agrarian reform and then counter-reform—violent conflicts over land have been materially shaped by both peasant, landowner and state repertoires of contention and repression, as well as by peasants' memories of dispossession.

Key words: dispossession; land grabbing; agrarian reform; Central America; Honduras.

Introducción: ¿por qué historizar?¹

La mayoría de los estudios sobre la reciente ola de transacciones de tierra tiende a carecer de una perspectiva histórica. La forma más común para remediar esta deficiencia ha consistido en remontarse a procesos de concentración de las tierra anteriores, para corregir la miopía histórica de quienes hablan de la actual ola de acaparamiento de tierras como algo “nuevo” (Huggins, 2011; Luna, 2013; Wily, 2012). Mientras la introducción de una perspectiva temporal más extensa y la inclusión de casos anteriores resultan bienvenidas en este artículo, el cual es necesariamente sintético; se argumenta que existen al menos otras tres razones más significativas, desde un punto de vista analítico, para examinar los antecedentes históricos.

Primero, el acaparamiento de tierra tiende a suceder en ciclos u olas dependientes tanto de las dinámicas históricas regionales específicas, como de las globales de acumulación de capital. Necesariamente, cada uno de estos nuevos ciclos es transformado por las formaciones sociales preexistentes y las particularidades locales y regionales, estas incluyen formas tradicionales y formales de tenencia sobre la tierra, configuraciones históricas de las relaciones de clase, redes de parentesco, patrones de género y de asentamiento, características ambientales, infraestructura existente o potencialmente existente, políticas públicas, acuerdos y tratados internacionales, así como formas de inserción en los mercados, entre otros elementos. Es decir, la literatura sobre dichas transacciones tiende a “olvidar” las relaciones histórico-sociales que producen los espacios rurales en donde ocurren los “nuevos” acaparamientos. Los acaparadores de tierra –ya sean “extranjeros” o “domésticos”, pasados y presentes– casi siempre deben operar dentro de contextos formados por prácticas, identidades y significados locales (LeGrand, 1998).

Pero, generalmente los gobiernos, corporaciones e instituciones multilaterales tienden a justificar las transacciones de tierra contemporáneas con aserciones respecto a la accesibilidad y deseabilidad de desarrollar las *terranullis* (tierras vacías) y cerrar las brechas de rendimiento: lo cierto es que resulta casi imposible encontrarlas en la actualidad, si es que existieron alguna vez.² De hecho, esas supuestas tierras vacías son típicamente “producidas” –tanto geográfica como discursivamente– a través de procesos anteriores de conflicto y resistencia que desplazaban o excluían a grupos específicos. Sin embargo, afirmaciones actuales sobre cómo estas tierras no le pertenecen a nadie, o son calificadas como “improductivas”, remiten a olas de acaparamiento de tierras previas y sugieren que existen continuidades capaces de vincular los procesos anteriores con los más recientes.³

Una segunda razón para historizar los análisis de las transacciones de tierras actuales se relaciona con la necesidad de cierta evidencia de base para poder evaluar los impactos. Los estudios recientes sobre el acaparamiento de tierras han documentado de forma persuasiva las consecuencias negativas de las transacciones particulares (y conjeturan sobre las consecuencias potenciales), pero existe también una tendencia en la literatura a razonar desde la evidencia anecdótica, de generalizar a partir de uno o varios casos y de acusar el acaparamiento de tierras por efectos negativos, tales

como la proletarización o la pérdida de derecho sobre el acceso al agua, efectos que posiblemente anteceden a las actuales transacciones, las cuales tienen otras causas o hubieran pasado en cualquier oportunidad. Información sobre el uso de la tierra y de las formas de subsistencia que existían antes de la implementación de la venta de la tierra resulta esencial para evaluar el impacto a corto o mediano plazo de cualquiera de estas transacciones (Oya, 2013).

La tercer razón para analizar el acaparamiento de tierras de manera histórica se relaciona menos con introducir un marco temporal más profundo, que con acercarse a los procesos contemporáneos como la historia del presente –tanto en términos conceptuales como metodológicos–. Esto significa observar el momento presente como un epifenómeno resultante de un conjunto de procesos materiales y sociales anteriores; restaurando así la agencia de clases sociales en contienda, en vez de entender sus acciones como determinadas completamente por las varias *deus ex machina* –por ejemplo, los auges en los precios de las mercancías o los préstamos multilaterales–, que figuran de forma tan prominente en la literatura sobre el acaparamiento de tierras. Esto también significa reconocer que los distintos contextos particulares se caracterizan por repertorios históricos, profundamente arraigados, de disputa de clase y de género, así como de represión estatal que forman los conflictos sobre la tierra y facilitan o impiden transacciones de gran escala. Estos elementos sugieren, a su vez, que las contingencias históricas o elecciones, tomadas durante las “coyunturas críticas” de diversos tipos, juegan un rol importante en los desenlaces agrarios y políticos de estas (Mahoney, 2001). Esto es tan cierto para los procesos previos de concentración de tierra, como del actual acaparamiento de tierras, ya sea en Centroamérica o en cualquier otro lugar.

¿Por qué Centroamérica?

Además de estas razones para historizar la discusión del acaparamiento de tierras, en este artículo se argumenta que existen múltiples razones para enfocarse específicamente en Centroamérica, una región con una extensa historia de conflictos agrarios, a la cual los estudiosos del acaparamiento de tierras le han dado poca atención.⁴ Primero, los países centroamericanos han compartido, a grandes rasgos, durante los dos últimos siglos una forma similar de inserción en la economía global, pero con un marcado contraste en lo que respecta a los desenlaces (Cardoso, 1975; Gudmundson, 1995; Martí i Puig, 2004). La región –y posiblemente otras– necesita un análisis situado históricamente, en lugar de la utilización de presunciones monolíticas causales como las que caracterizaron los paradigmas de la dependencia y de los sistemas-mundo durante las décadas de 1960 y 1970, y que hoy en día subyacen mucha de la literatura reciente sobre las causas del acaparamiento de tierras (Stern, 1998).

Segundo, la región centroamericana es pequeña, pues la extensión total de sus cinco países alcanza los 419 mil km², siendo así más pequeña que España, con menos de la mitad de la extensión territorial de Venezuela y solo un sesenta por ciento de la de Texas. Si bien esta diminuta extensión podría ser vista como un indicador de su irrelevancia para entender las tendencias globales del acaparamiento de tierras, aquí

se argumenta más bien que esta realidad contribuye significativamente a la discusión, pues facilita el replanteamiento del tema de escala. La literatura, tanto académica como activista, sobre las recientes adquisiciones a gran escala de tierras le ha puesto tanto énfasis al número de hectáreas “acaparadas”, que se tienden a perder de vista otros aspectos importantes de la escala, tales como el tipo de capital utilizado en cualquier transacción particular, la apropiación de otros recursos, tales como agua, así como el los impactos reales y posibles que tendrán para las poblaciones rurales (Borras *et al.*, 2012; Edelman, 2013 y Oya, 2013).

En particular, la escala geográfica de cualquier acaparamiento de tierra dice muy poco sobre las formas en las cuales las poblaciones rurales serán excluidas, incorporadas o subsumidas a través de otros mecanismos, a nuevas formas de capital (Li, 2011). Centroamérica ha visto a través del tiempo acaparamientos de tierra a gran escala y también en un período más reciente –y más importante para nuestro argumento– acaparamientos de tierra de un tamaño modesto con respecto a los estándares globales, pero que han generado grandes conflictos agrarios. De hecho, fuera de Colombia, los conflictos agrarios más agudos hoy en día en toda Latinoamérica se encuentran en Centroamérica. Podría hacerse la siguiente pregunta: si estas confrontaciones resultan de acaparamientos medianos y pequeños de tierra, ¿por qué los acaparamientos mucho más extensos que se han observado en Sudamérica, no han producido conflictos de igual magnitud?

No es solo que los antecedentes y un acercamiento más historizado sean importantes, sino también que una mirada geográfica más amplia sobre los sitios del acaparamiento de tierras actuales podría brindar algunas pistas sobre tendencias más amplias y problemas metodológicos. Mucha de la atención de la literatura sobre acaparamiento de tierras se ha centrado en África Subsahariana, un fenómeno que sin duda refleja alguna combinación de tendencias genuinas, con sesgos existentes en las más importantes bases de datos sobre acaparamiento. Así, enfocarse en Centroamérica apunta hacia el mismo problema, solo que en “menor escala”.

Recientemente, la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), llevó a cabo un serie de estudios sobre el acaparamiento de tierras en diecisiete países de América Latina (Gómez, 2011; Soto Barquero y Gómez, 2012). En dicha serie se incluyó a tres países centroamericanos (Costa Rica, Guatemala y Nicaragua), pero, quizás de forma no intencional, se excluyó a Honduras, que junto a Guatemala, son posiblemente los dos lugares donde se encuentra el conflicto agrario más agudo de América Latina (con excepción de Colombia), en los últimos quince años (más adelante se hará más referencia al respecto).⁵ Dichas elecciones en la construcción del marco de la muestra –aquí como en cualquier otra parte– generan sesgos no reconocidos que por sí mismos producen lecturas muy particulares de la historia. Con una definición muy cerrada de lo que significa “acaparamiento”, el cual enfatiza el rol de los gobiernos e inversores extranjeros y la apropiación de tierra para la producción de alimentos, no es de extrañarse que el estudio llegue a la sorprendente conclusión de que en América Latina “el fenómeno del acaparamiento de tierras se encuentra en una etapa inicial y se restringe solo a dos grandes países: Argentina y Brasil” (Gómez, 2011: 13).

La noción de que el problema de acaparamiento de tierras en América se limita únicamente a Argentina y Brasil deriva de una definición demasiado restrictiva del fenómeno, lo cual ha sido criticado de forma persuasiva por otros estudiosos (Borras, Franco, Gómez, Kay y Spoor, 2012; Borras, Kay *et al.*, 2012). Por su parte, los estudios de la FAO en Centroamérica apuntan hacia grandes flujos de capital regional (centroamericano) y mexicano dirigidos hacia los sectores de azúcar y palma africana, y de flujos menores de inversión extraregional, tanto hacia estos sectores como hacia otros, tales como el de ganadería y el forestal. Dichos estudios también apuntan hacia el hecho de que países pequeños pueden ser actores importantes dentro de los mercados internacionales, así como lugares particularmente atractivos para la inversión. Por ejemplo “empezando en el 2000, Costa Rica, Honduras y Guatemala estaban entre los 20 exportadores más importante de aceite de palma africana a nivel mundial, y entre los cinco mayores en América Latina” (Carrera y Carrera Campos, 2012: 269). En términos de productividad, las plantaciones guatemaltecas presentaron un rendimiento promedio de cinco toneladas métricas de fruta por hectárea, contra el promedio mundial de 3,2 toneladas métricas (Carrera C. y Carrera Campos, 2012: 272). Sin embargo, como los estudios de la FAO tienden a evitar las investigaciones “en el campo”, y se enfocan casi exclusivamente en los cambios institucionales y a veces le dan un inmerecido énfasis a las “percepciones” de “actores clave”, los cuales tienden a invisibilizar las fricciones producidas por las dinámicas de concentración de tierra-desposesión, así como por la resistencia campesina que estas tienden a generar.⁶

El presente artículo se divide en dos secciones. En la primera se analizan tres ciclos de desposesión y acaparamiento de tierras en Centroamérica en el período poscolonial, el período liberal, los enclaves bananeros y las contrarreformas que siguieron tras las reformas agrarias en la región. Además se muestra cómo cada uno de estos ciclos debe ser entendido en la intersección entre fuerzas globales que colocaron a la región dentro de roles particulares, y las dinámicas locales de desposesión y resistencia. También se argumenta que para entender cada uno de estos ciclos, resulta necesario conocer cómo la región y los actores particulares en cada país emergieron del ciclo anterior.

Ahora bien, en la segunda parte del artículo se examina el actual conflicto agrario que está convulsionando a la región del Bajo Aguán en el norte de Honduras. Dicho caso suscita varias preguntas significativas sobre algunas de las suposiciones generalizadas presentes en la literatura sobre el acaparamiento de tierras, especialmente porque parece ser un caso de acaparamiento, pero no ha sido identificado como tal. El caso del Aguán sugiere, en primera instancia, que para entender los conflictos agrarios actuales resulta necesario comprender las dinámicas históricas que crearon las condiciones de posibilidad para las actuales formas tanto de desposesión como de resistencia. Segundo, en contra del énfasis dominante sobre el capital “extranjero” de la literatura sobre acaparamiento de tierras, en el Aguán, la mayor parte del acaparamiento lo han llevado a cabo inversionistas “domésticos”, aunque con el apoyo de instituciones como la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés).⁷ Además, las organizaciones campesinas también están extendiendo el área dedicada para la palma africana, un cultivo que es comúnmente demonizado por la

literatura sobre acaparamiento, y yuxtapuesta a la producción de granos básicos, la cual supuestamente reemplaza. Para complejizar aún más la literatura convencional sobre acaparamientos, resulta aparente, al menos hasta el momento, que la expansión de la palma no sea atribuible al boom de los agrocombustibles, ya que la gran mayoría de la producción se dirige ya sea para el mercado interno hondureño, o hacia México, para la industria cosmética.⁸

El Período liberal y el primer ciclo de acaparamiento de tierras

El primer ciclo de acaparamiento de tierras en la Centroamérica independiente se da bajo la bandera de los regímenes liberales de finales del siglo XIX. Para hacer un análisis de este proceso resulta necesario reseñar brevemente la situación en cada país, pero es aún más importante considerar las divergencias existentes entre la doctrina liberal y la práctica, y entre las interpretaciones convencionales del Liberalismo y las evidencias presentadas por las investigaciones históricas más recientes. En lo que respecta a las políticas de tierras, dos fenómenos relevantes para entender este ciclo de acaparamiento de tierras son: primero, la privatización –generalmente para la producción de café– de tierras no privadas en manos de pequeños productores (ejidos o tierras comunales, particularmente en zonas indígenas, y cofradías o tierras en manos de la Iglesia);⁹ y segundo, el otorgamiento de grandes concesiones, específicamente a empresas extranjeras bananeras y del ferrocarril, pero también para empresarios en otros sectores (por ejemplo, hule, minería, recursos forestales, ganadería).¹⁰

Estos dos fenómenos reflejan lo que desde la teoría de los regímenes alimentarios se conoce como el “primer régimen alimentario” mundial, el cual fue liderado por Gran Bretaña (circa 1870-1914). En el caso de la región centroamericana, la articulación con este primer régimen alimentario fue a través de la creación de un conjunto de “economías de postres” (azúcar, café y bananos) orientada hacia la exportación, para brindar calorías baratas y estimulantes a las clases trabajadoras de los centros coloniales, siendo este un tema en general olvidado por la literatura en regímenes alimentarios, pero ampliamente cubierto en estudios que se enfocan en mercancías agrícolas específicas¹¹.

Aunque Centroamérica ya había experimentado algunos procesos de liberalización económica tan temprano como a mediados del siglo XVIII con las reformas borbónicas y luego bajo regímenes conservadores y liberales de corta vida en la era de la independencia, el período de reforma liberal profunda empezó en Guatemala durante la década de 1870.¹² La “reforma” guatemalteca estuvo conformada por un proceso de tres etapas que incluían la incautación y privatización de tierras de la iglesia; la abolición de arrendamientos de tierra de larga duración (censo enfiteutico), donde la mayoría de la tierra era concedida a foráneos por las comunidades rurales; y la subasta de tierras baldías estatales, la mayoría de las cuales habían sido usadas tradicionalmente por campesinos indígenas y ladinos. Durante la década 1880, un proceso similar –aunque significativamente más radical– de privatización de tierras se inició en El Salvador, país con menos tierras eclesiales que Guatemala y donde las potenciales zonas cafetaleras se encontraban densamente pobladas. Regímenes liberales también

llegaron al poder en Honduras (en los 1870) y en Nicaragua (en los 1890), pero estos procesos de reforma fueron “abortados”, “frustrados” e incompletos, en gran medida debido a la intervención extranjera y obstáculos geográficos que limitaban en acceso a las potenciales zonas cafetaleras (Euraque, 1996; Lanuza, Vázquez, Barahona, & Chamorro, 1983; Mahoney, 2001). En Costa Rica, el primer país exportador de café en la región, la privatización de las propiedades comunales y de la Iglesia empezó un poco antes de la independencia y procedió gradualmente en un contexto de una limitada población y una abundancia relativa de tierra disponible (Gudmundson, 1983).

A finales del siglo XIX, el apogeo del liberalismo centroamericano coincidió con la emergencia de Estados fuertes (en particular de los poderes ejecutivos) y por renovados esfuerzos por “construir naciones”. Esta transformación de las provincias coloniales en Estados involucró la creación de regímenes constitucionales nominales, la secularización de la sociedad y la administración, disciplinamiento y socialización política de las clases populares. Los liberales de este período consideraban que una significativa reforma económica era importante, pero no la colocaban necesariamente al principio de sus agendas. El “dogmatismo liberal del libre comercio” al que se refieren varios análisis, era definitivamente dogmático, pero la mayor parte del fervor liberal estaba concentrado en otros temas, no en el comercio (Mallon, 1988: 180).

Los liberales del siglo XIX buscaron superar el legado económico del período colonial, el cual, entre otros aspectos, se caracterizaba por una oferta limitada de socios comerciales, un conjunto de monopolios comerciales y financieros instalados, una limitada mercantilización de la tierra y el trabajo, y pesadas cargas fiscales, incluyendo grandes tasaciones para la Iglesia (inclusive cuando algunas de estas restricciones disminuyeron hacia finales del dominio español). Para los liberales decimonónicos, el “libre comercio” significaba superar las limitaciones para la actividad económica de las élites que eran legado de la era colonial. Esto necesariamente no significaba “obtener el precio correcto” o “abrir” las economías por medio de la devaluación de las monedas, la baja de los aranceles o la reducción el gasto público, como lo intenta hacer el liberalismo actual (o como podría haber sido el caso en Gran Bretaña del momento y en otros lugares) (Bulmer-Thomas, 1994).

La ideología del libre comercio de fin del siglo XIX y de principios del XX no excluía prácticas comerciales claramente no liberales. Los aranceles eran la fuente de ingreso público más importante, cuando no la única de estos gobiernos (Lindo-Fuentes, 1993). Además, el propósito central de los aranceles aduaneros era recoger más ingresos públicos (especialmente para pagar la deuda externa, en su mayoría con bancos británicos), que para proteger a los productores domésticos, como sucedió en un período posterior con en los países latinoamericanos más grandes.¹³ Las bases fiscales frágiles del Estado liberal, así como la doctrina liberal, se convirtieron en el ímpetu para la privatización de tierras y la entrega de concesiones, las cuales representaban flujos potenciales de lucrativos ingresos fiscales para los cofres del Gobierno.

Dada la imagen draconiana presentada por algunos análisis influyentes de las Reformas Liberales, así como la forma arrogante de llamar a alguna de las leyes clave –por ejemplo, la Ley de Extinción de Comunidades Indígenas de El Salvador de

1881– parecería ir en contra de la idea de que la mercantilización de la tierra durante el liberalismo del siglo XIX fue modesta con respecto a los procesos actuales,¹⁴ pero ciertamente no lo fue para aquellas personas que vivían en las zonas más afectadas, en especial en El Salvador, donde dichas reformas pueden ser vistas como las próximas causas de las posteriores protestas y rebeliones campesinas, aunque en países con regímenes liberales más fuertes y represivos, como Guatemala, en donde la resistencia en principio resultó menos dramática y más “cotidiana” (Gould y Lauria-Santiago, 2008; Handy, 1984; McCreery, 1994). Las reformas liberales de final del siglo XIX en Guatemala –consideradas como las segundas más radicales, detrás de las salvadoreñas– privatizaron varios tipos de tierras ejidales y cofradías, lo que se convirtió en las principales tierras cafetaleras de piedemonte. Por esas mismas reformas también permitieron que miles de hectáreas de tierras comunales fueran tituladas en lugares donde formas no capitalistas de propiedad y de producción persistían, aunque bajo una intensa presión (McCreery, 1994).

Entre la “revolución” liberal de 1871 y 1883, fueron vendidas cerca de 400 mil hectáreas de tierras públicas en Guatemala, y otras 74 250 entraron al mercado con la abolición del censo enfiteúutico, un tipo de arrendamiento decimonónico que otorgaba acceso a tierras ejidales, a cambio de una renta anual del 2 o 3 por ciento de su valor (Cardoso, 1975; Handy, 1984; Wagner, 2001).¹⁵ Esto era mucha tierra (4 742,5 km²), y ciertamente terminó concentrándose en las manos de un número limitado de dueños (Castellanos Cambranes, 1985). Pero la mayor importancia de la privatización liberal de tierras, como ciertos análisis recientes sostienen, tuvo que ver menos con su extensión territorial, que en el conjunto de relaciones sociales que destruyó y recreó, y en las múltiples formas en las cuales expuso a los grupos subalternos a la disciplina del Estado, las élites y el mercado (Dore, 1997; Gould, 1998; Lindo-Fuentes 1990; Ronsbo, 1997). Concretamente, la “reforma” liberal en Guatemala y en El Salvador (y en menor medida en los demás países de la región) desposeyó a las poblaciones indígenas, por lo que se creó una gran masa de trabajadores “libres” sin tierra, y solidificaron los Estados centrales que desplegaron formidables aparatos represivos y de control de la fuerza de trabajo. Todos estos elementos se tornan cruciales para poder entender el segundo ciclo de desposesión en la región.

El segundo ciclo: el banano a finales del siglo XIX y a principios del XX

El segundo gran ciclo de acaparamiento de tierras en Centroamérica “le maja los talones” a las reformas liberales. Si la motivación principal de las reformas liberales fue “liberar” tierras y trabajo para la producción de café, el ímpetu detrás de la segunda ola, la cual involucraba a las empresas bananeras estadounidenses, fue la modernización de infraestructura (especialmente líneas férreas, puertos, carreteras y la generación eléctrica) para desarrollar tierras “vacías” y generar nuevas fuentes de ingresos mediante aranceles de exportación y concesiones. El banano prosperaba en las fértiles y húmedas tierras bajas de la vertiente atlántica –particularmente en Costa Rica, Honduras y Guatemala– donde la malaria y la fiebre amarilla eran

endémicas y las poblaciones humanas dispersas (fue hasta la década de 1930 cuando las plantaciones bananeras se extendieron al litoral pacífico). Estos espacios –habitados en la mayoría de los casos por grupos indígenas, garífunas y de campesinos mestizos dispersos– no se podían considerar exactamente *terranullius*, pero sí constituían un espacio relativamente “vacío”, en términos de desarrollo, para la creación de economías de enclave. Va más allá del alcance del presente artículo analizar la sórdida historia de las empresas bananeras estadounidenses en Centroamérica, tema sobre el que existe una extensa literatura. Es suficiente mencionar, para nuestros objetivos que (1) las actividades de estas compañías a finales del siglo XIX y principios del siglo XX frecuentemente incluían grandes adquisiciones de tierras y que estas adquisiciones –así como el control sobre el transporte, finanzas, puertos, electricidad y compañías navieras– les daba una influencia política desmedida y la posibilidad de dominar tanto su fuerza de trabajo, como a los pequeños productores y la creación de nuevos tipos de espacios rurales y de grupos sociales que a su vez transformaron las consecuentes relaciones agrarias, y (2) esta fuerza de trabajo se conformó fundamentalmente de trabajadores proletarizados y semiproletarizados que habían sido desposeídos en el previo ciclo de acaparamiento de tierras liberal.¹⁶

Uno de los principales obstáculos que debieron enfrentar las élites liberales fue el transportar su café desde las zonas de producción montañosas, hasta las costas, desde donde era exportado a Europa y Norteamérica. Tomando en cuenta estos imperativos, no es sorprendente que las primeras plantaciones de banano nacieran como corolario de los proyectos ferroviarios. En Costa Rica, en 1871, los empresarios estadounidenses Henry Meiggs y Minor Keith fueron contratados para construir una línea de tren desde la costa Atlántica hasta la ciudad capital en San José. Frustrado por los impenetrables bosques tropicales y los constantes problemas laborales, el proyecto resultó ser más largo y costoso de lo que anticipaba Keith –quien asumió el control absoluto del proyecto tras la muerte de Meiggs en 1877–, razón por la cual empieza a sembrar bananos al lado de las líneas férreas y a exportar la fruta desde Puerto Limón. En 1884, seis años antes de que la línea de tren fuera finalmente completada con un precio de alrededor de cinco mil trabajadores muertos, el Gobierno de Costa Rica le otorgó a Keith un arrendamiento por 99 años del ferrocarril y de 800 000 acres (323 887 hectáreas) de tierra, a cambio de pagar la deuda externa del país (Aprobación del Contrato Soto-Keith, 1884). Aunque la mayoría de esta tierra fue eventualmente vendida o retornada al Gobierno, la parte bajo control de Keith se convirtió en el núcleo de las operaciones en Costa Rica de lo que llegó a convertirse en la United Fruit Company (UFCO). En los años sucesivos, numerosos contratos para la construcción de varios ramales ferroviarios en las tierras bajas caribeñas –con Keith y con otros– resultaron en “obsequios” adicionales de tierras, incluyendo una que concedía quinientas hectáreas por cada kilómetro de línea construida (Casey Gaspar, 1979: 25-32).

En Guatemala, los orígenes de la UFCO también están inextricablemente vinculados a los proyectos ferroviarios. La historia temprana del ferrocarril al Atlántico en el país involucró un conjunto de contratos con varios empresarios, incluyendo socios de Keith y eventualmente a Keith mismo. Como en Costa Rica, el Gobierno

frecuentemente otorgaba tierras como pago parcial, aunque en una escala más modesta, en un rango de entre 57 000 y 168 000 acres (23 077 a 68 016 hectáreas) (Dosal, 1993: 17-40). La concesión más grande a Keith en el Valle de Motagua se convirtió en la pieza central del imperio de la UFCO en Guatemala (Dosal, 1993). Para mediados del siglo XX la United por sí sola controlaba más de 200 mil hectáreas, convirtiéndola por mucho en la terrateniente más grande de Guatemala (Immerman, 1988).

Por su parte, en Honduras, a finales del siglo XIX había florecido un sector bananero minifundiario, primero en las Islas de la Bahía y posteriormente a lo largo de la Costa Norte. Esto llamó la atención de los primeros empresarios bananeros extranjeros, quienes en un inicio se dedicaban más a exportar que a producir la fruta. En contraste con Costa Rica y Guatemala, Honduras nunca logró construir un sistema ferroviario que conectara su ciudad capital con las costas. Las pocas líneas existentes fueron ubicadas en la Costa Norte, pero la mayor parte del dinero prestado para la construcción del ferrocarril fue destinado al pago de comisiones e intereses, dejando al país con una tremenda y creciente deuda. En 1888, un observador comentaba que “a los precios de tierra prevaletientes, Honduras no podría pagar su deuda, ni vendiendo todo su territorio” (Euraque, 1996: 4). Entre 1900 y 1930, 57 concesiones fueron otorgadas a las empresas bananeras más grandes (o sus antecesores), las cuales típicamente incluían tierra y diversos tipos de exenciones fiscales (Euraque, 1996: 7). Estas concesiones significaron una crisis fiscal constante para el Estado, volviéndolo notoriamente vulnerable a poderosas influencias extranjeras. La Tela Railroad Company –una subsidiaria de la UFCO– llegó a controlar 194 992 hectáreas, la mayoría a través de una concesión que le daba 500 hectáreas por cada kilómetro de la línea completada (Flores Valeriano, 1987: 26). La Standard Fruit Company recibió concesiones adicionales, por lo tanto, para principios del siglo XX, dos compañías controlaban la producción, transporte y exportación de banano en Honduras, país que emergió como el líder exportador del istmo (Soluri, 2005: 8, 33).

Para 1930, la UFCO por sí sola controlaba más de 1.1 millones de hectáreas de tierra en Centroamérica, aunque únicamente alrededor de 56 mil de estas estaban plantadas con banano. La mayoría de la tierra restante se mantenía en reserva para futura expansión, cuando los suelos o las enfermedades requirieran abandonar las plantaciones más viejas (Moberg y Striffler, 2003: 12).¹⁷ Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, dicha empresa se deshizo de muchas propiedades, proceso que se aceleró en las décadas siguientes y en el cual los riesgos fueron transferidos a los pequeños productores, quienes continuaron vendiéndole su fruta para exportar (Bucheli, 2003: 82-85). Sus tierras “ociosas” y el trato arrogante a sus trabajadores se convirtieron en temas cada vez más cargados y conflictivos a lo largo del istmo.

Además de apuntar el acaparamiento de tierras por parte de las compañías bananeras como un antecedente importante, la significancia de los enclaves en nuestro argumento es que estos fomentaron poderosos discursos nacionalistas, los cuales generaron diversos tipos de resistencia, en especial huelgas masivas (en Costa Rica en 1934 y en Honduras en 1954), así como ocupaciones de tierras generalizadas. Las tierras de las compañías se convirtieron en escenarios para posteriores conflictos y

reformas, y su fuerza de trabajo –imbuida con una creciente consciencia política a través de los conflictos en las plantaciones– se transformó en un nuevo actor en las luchas por la tierra.

Reformas y contrarreformas agrarias del siglo XX

Esta sección provee una periodización y visión general de la reforma y contrarreforma agraria en Centroamérica, temas sobre los que existe una amplia literatura cuyo análisis a profundidad supera los objetivos del presente artículo. Los contextos y los motivos para las reformas en los diferentes países fueron diversos, así como sus alcances e impactos. Las reformas malogradas de la “primavera democrática” (1945-1954) en Guatemala empezaron por distribuir las tierras expropiadas a alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y luego –en 1952– se enfocaron en las grandes propiedades ociosas.¹⁸ La medida especificaba que las expropiaciones debían ser completadas en seis semanas, una disposición bastante radical, aunque continuaron durante 18 meses, hasta que una invasión dirigida por la CIA derrocó al presidente Jacobo Arbenz.

Las estimaciones difieren en la cantidad de tierra distribuida, pero posiblemente rondó las 884 000 hectáreas, de las cuales 604 000 fueron de expropiaciones (un 16 por ciento de las tierras del país aptas para la agricultura) (Melville y Melville, 1971: 54-57). De las 222 580 hectáreas que la United Fruit tenía en el país, 146 000 fueron expropiadas, lo que desató la ira del Gobierno estadounidense y se convirtió en uno de los factores más importantes detrás del golpe de Estado de 1954. Un cambio de 180 grados sucedió rápidamente tras la caída de Arbenz, ya que alrededor de un 99 por ciento de la tierra distribuida durante la reforma agraria fue devuelta a sus antiguos dueños (Thiesenhusen, 1995: 79). La violencia y la represión que acompañaron este giro cicatrizaron a la sociedad guatemalteca y tuvieron un eco en las contrarreformas agrarias de los años noventa en el resto del istmo (ver más adelante).

El lanzamiento de la Alianza para el Progreso en la conferencia de Punta del Este de 1961 fue el siguiente punto de inflexión para la reforma agraria en América. El “telón de fondo” de esta reunión consistió en radicalizar la revolución cubana, la cual los políticos estadounidenses temían que pudiera esparcirse por el hemisferio y ellos esperaban evitarlo con reformas agrarias que apaciguaran a los campesinos potencialmente rebeldes. A los pocos años todos los gobiernos de América Latina habían creado agencias de reformas agrarias e iniciado la distribución de tierras. En Centroamérica, inclusive los regímenes represivos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua llevaron a cabo pequeños programas de colonización, al ubicar a familias campesinas sin tierras en algunas públicas y en zonas remotas (en varias ocasiones desplazando a grupos indígenas o de otro tipo presentes ahí) (Thiesenhusen, 1995: 132-134; Grandia, 2009: 724).

En Costa Rica, el Gobierno inició una modesta reforma agraria (que continuó hasta mediados de los 1980, alcanzando las 226 558 hectáreas) que combinó la resolución de ocupaciones de tierra ya existentes, expropiaciones de tierra y la distribución y colonización de zonas remotas (Román Vega y Rivera Araya, 1990: 15). En Honduras, como

se analizará más adelante con mayor detalle, una tibia reforma agraria en la década de 1960 se vio acelerada a mediados de los años setenta, bajo un régimen militar populista y la creciente presión de un campesinado altamente organizado. En Nicaragua, poco después de que los sandinistas derrocaron la dictadura somocista en 1979, el Gobierno se apoderó de 781 324 hectáreas de propiedades que habían pertenecido tanto a la familia Somoza como a sus colaboradores cercanos, creando un vasto sector de cooperativas y granjas estatales. Durante la década de 1980, una nueva ley de reforma agraria llevó a más expropiaciones de grandes propiedades de tierra que estaban siendo subutilizadas, aunque para 1989 las autoridades sandinistas detuvieron el programa en un esfuerzo de reducir la polarización social y darle fin a la guerra civil (Blokland, 1992: 88-90). Al mismo tiempo, en El Salvador en 1980, los Estados Unidos, temiendo un contagio desde Nicaragua, promovieron una radical reforma agraria, aunque orientada hacia la contrainsurgencia, la cual estableció un techo constitucional de 245 hectáreas a las propiedades. Para finales de los años ochenta, cooperativas campesinas tenían 207 868 hectáreas y los beneficiarios individuales de la reforma habían recibido otras 69 231 hectáreas (Montoya, 1991: 53). Más distribuciones de tierra a excombatientes se dieron como parte del acuerdo que dio fin a la guerra civil en 1992, pero para entonces la que antes fuera una élite agraria había emigrado de la agricultura a la industria y finanzas (Segovia, 2004; Segovia, 2006; Robinson, 2003).

Las reformas agrarias de 1960 a 1980 tuvieron varios efectos relevantes para el presente análisis. Primero, crearon un gran y a veces dinámico sector de productores, quienes se ubicaron en espacios que en algunos casos incluían las mejores tierras para la agricultura. Segundo, estas reformas vinieron a cementar un contrato social entre el campesinado beneficiado y el Estado, lo cual generó crecientes expectativas así como nuevas concepciones sobre cuáles eran sus derechos. Tercero, dichas reformas promovieron la siembra de cultivos “flexibles”, así como el conocimiento técnico para cultivarlos, particularmente de palma africana y también de caña de azúcar; estos se convirtieron en los 1990 en los catalizadores de un importante acaparamiento de tierras por parte del sector privado.¹⁹ Finalmente, y en cuarto lugar, en todos los casos, las reformas fueron socavadas por la obligación de los beneficiarios de pagar las tierras que recibieron, por la globalización de los mercados agrícolas y por la incapacidad de los Estados para brindar suficientes recursos complementarios para ser exitosos: asistencia técnica, formación administrativa, irrigación, aseguramiento, crédito, almacenamiento de cosechas, procesamiento y comercialización. Para principios de los 1990, la creciente globalización del comercio agrícola, la implementación de reformas neoliberales en toda la región y los crecientes incentivos para la agricultura de exportación de productos no tradicionales, prepararon el terreno para una profunda reconfiguración de lo que había sido el espacio de la reforma agraria.

El fin de las reformas agrarias en Centroamérica abrió la vía y creó el marco institucional para la privatización masiva de empresas campesinas y de parcelas de beneficiarios individuales. Cierta privatización del sector reformado ya era evidente en Costa Rica a principios de 1980 (Edelman, 1989). En Nicaragua, poco antes de que el Frente Sandinista dejara el poder en 1990, la privatización se inició a gran escala,

primero como resultado de la Ley 88, que permitía la venta de las tierras de la reforma agraria, y luego a través de la “piñata” o la usurpación de recursos del sector público por parte de los salientes líderes sandinistas, y finalmente –de forma más significativa– a través de un revitalizado mercado de tierras que permitió que inversores tanto nicaragüenses como extranjeros pudieran devorar las propiedades de campesinos endeudados a precios risibles (Amador y Ribbink, 1993: 3-15; Jonakin, 1997: 100-102; Robinson, 2003: 79-81). Un estimado de 1995 sugería que terratenientes nicaragüenses y extranjeros habían asumido control efectivo de alrededor de 350 mil hectáreas que originalmente habían sido distribuidas a campesinos y excombatientes (Núñez Soto, 1995: 41). Los mecanismos para esta apropiación tuvieron que ver menos con la titulación de tierras de la reforma que con otras formas de contratación flexible y arrendamiento, algunos de dudoso estatus legal.

En Honduras, la contrarreforma sucedió con una rapidez y profundidad similar. Entre 1962 y 1990, como se detalla a continuación, el Estado hondureño distribuyó más de 376 mil hectáreas a eso de 66 mil familias rurales (Sierra Mejía y Ramírez Mejía, 1994: 59). En 1990, el Gobierno anunció un plan de ajuste estructural y dos años después la “Ley de Modernización Agrícola” entró en efecto, permitiendo la titulación privada y la venta de las tierras de la reforma agraria (Honduras Poder Legislativo, 1992). Solo en 1992, el primer año de la ley, los datos oficiales muestran que alrededor de un 17 por ciento de los beneficiarios de la reforma habían abandonado o vendido sus tierras (Thorpe *et al.*, 1995: 113).²⁰ A medida que la contra-reforma se aceleró, también lo hicieron la extensión del despojo y la violencia asociada; en ningún lugar esto fue tan evidente como en el Bajo Aguán.

Conflicto agrario en el Bajo Aguán

Durante las décadas de 1960 y 1970, el Bajo Aguán fue la pieza central de la reforma agraria hondureña y el núcleo del movimiento campesino más fuerte de Centroamérica;²¹ pero durante los años noventa, se convirtió en la “capital de la contrarreforma agraria” en el país (Macías, 2001); y desde el golpe de Estado del 2009 que depuso al presidente electo José Manuel “Mel” Zelaya, el Bajo Aguán ha presenciado una dramática escalada del conflicto agrario y la violencia contra las comunidades campesinas. Al menos cincuenta asesinatos han sucedido como resultado del conflicto en la región. Las víctimas han sido en su mayoría activistas campesinos, pero la lista incluye a un periodista, un abogado vinculado a las organizaciones campesinas, y abogados y guardias que trabajaban para los grandes terratenientes (“Asesinan a dos abogados”, 2013; CONADEH, 2012). El conflicto enfrenta a un grupo de organizaciones y comunidades campesinas, herederas de los poderosos movimientos campesinos de 1960 y 1970, contra un pequeño grupo de grandes terratenientes que se habían enriquecido como industriales durante 1970 y 1980 (Posas, 1981a; Ruhl, 1984; Meza *et al.*, 2008).

A primera vista, el conflicto parece involucrar a un campesinado de subsistencia y a un conjunto de terratenientes transnacionalizados que se interesan en expandir la producción de palma africana, uno de los “cultivos flexibles” por excelencia, el cual

combina la posibilidad de ser utilizado ya sea como aceite comestible, agrocombustibles o para la industria cosmética, así como otros beneficios en ciertos casos, en la forma de créditos de reducción certificada de emisiones de carbono, mediante el Protocolo del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Kioto (Borras, Franco, *et al.* 2012; Kerksen, 2013: 68-73; Wong, 2013). Enmarcado de esta manera, el actual conflicto en el Valle del Aguán tiene toda la apariencia de un acaparamiento de tierra, sin embargo, debido al tamaño relativamente pequeño de la tierra “acaparada” a principios de los noventa –alrededor de 21 mil hectáreas– y el hecho de que es previo al aumento del acaparamiento global de tierras que comienza en el 2008, la mayor parte de la literatura sobre el tema ignora el conflicto en el Valle del Aguán (ver Kerksen, 2013). Al mismo tiempo, debido a que la mayor parte de la inversión en la zona es “doméstica”, cae fuera de la definición de “acaparamiento de tierras” de la FAO, lo cual podría explicar por qué de 17 países latinoamericanos, Honduras quedó fuera del estudio.

Para encontrar las raíces históricas del conflicto actual en el Aguán, se necesita volver la mirada a la primera mitad del siglo anterior. La Truxillo Railroad Company –una de las dos subsidiarias hondureñas de la UFCO– empezó su ingreso en la región a principios de 1920 talando vastas cantidades de maderas preciosas y sembrando miles de hectáreas de banano. En sus primeros años en el Aguán, la compañía compraba la mayor parte de los bananos que exportaba de pequeños productores locales. Pero principios de los años cuarenta, la enfermedad de Panamá (un hongo) se propagó en la región, lo que llevó al abandono de docenas de fincas (Soluri, 2005: 50, 77-80). Más tarde, para el final de la Segunda Guerra Mundial las bananeras habían abandonado prácticamente todas estas tierras y los extrabajadores de las bananeras y del ferrocarril, las comunidades garífunas e inmigrantes salvadoreños sin tierra empezaron a asentarse en el lugar, permaneciendo fundamentalmente fuera de la influencia del Estado (Casolo, 2009). Después de 1945, la Standard Fruit adquirió grandes propiedades en la región, pero solo tuvo un éxito limitado en lograr poner a producir los suelos infestados con la enfermedad de Panamá (Soluri, 2005: 50, 77-80, 168-171).

En mayo de 1954 se llevó a cabo una huelga general que involucró a 35 mil trabajadores de las plantaciones bananeras de la Costa Norte (Argueta, 1995; MacCameron, 1983; Posas 1981b; Robleda Castro, 1995). Entre agosto y setiembre del mismo año, fuertes lluvias e inundaciones destruyeron muchas de las fincas bananeras en la región y de nuevo las compañías abandonaron grandes extensiones de tierra e introdujeron cambios tecnológicos que llevaron al despido de alrededor de 13 mil trabajadores (casi la mitad de la fuerza de trabajo total). Esta combinación entre tierras ociosas y muchas manos sin tierra llevó al crecimiento de un combativo movimiento campesino que no solo buscaba el acceso a la tierra, sino también la protección de su tenencia en contra de los intentos de los terratenientes por desalojarlos. De este momento, la Costa Norte, que tenía la mayoría de las plantaciones bananeras, se convirtió en el centro del movimiento campesino nacional, y las invasiones de tierra –“recuperaciones” como son entendidas en Honduras– se convirtió en la forma más importante de obtener tierra y mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas (Posas, 1981a).

En 1962, después de la ya mencionada reunión en Punta del Este que estableció la Alianza para el Progreso, Honduras aprobó su primera ley de reforma agraria moderna, basada sobre todo en la distribución de tierras estatales y ejidales, incluyendo aquellas que habían sido ocupadas ilegalmente por pequeños y grandes productores (Ruben y Fúnez, 1993: 13; Thiesenhusen, 1995: 87). Aun cuando esta medida garantizaba la propiedad privada y no fijaba techos fundiarios, esta generó una intensa oposición por parte del sector terrateniente y de la United Fruit Company, logrando presionar así al presidente Ramón Villeda Morales a cambiar la ley para que la propiedad privada no pudiera ser expropiada (Schulz y Schulz, 1994: 29-30). Por más de una década, los resultados de la ley fueron limitados, con solo 35 951 hectáreas siendo distribuidas entre 6 271 familias campesinas en todo el país (Ruhl, 1984: 53).

En 1972, un régimen militar “progresista” (influenciado por experiencias similares en Perú y Panamá, entre otros) tomó control de Honduras y entre 1974 y 1975 –enfrentado una creciente presión por parte de campesinos sin tierra, arrendatarios y extrabajadores de la bananera– decretó una reforma agraria de gran envergadura. La nueva ley creó y fortaleció tanto a las agencias estatales como al marco jurídico para la creación de empresas campesinas. También establecía un techo en el tamaño de las propiedades de tierra e incluía provisiones para la expropiación de tierras privadas o estatales “ociosas” o subutilizadas, para el asentamiento de campesinados sin tierra. El ritmo de la distribución de tierras se aceleró durante la década de 1970. Para 1980, el ocho por ciento del total de la tierra apta para la agricultura –unas 207 433 hectáreas– había sido distribuida a 46 890 familias rurales, lo que representaba un doce por ciento del total nacional; 22 por ciento de los “sin tierra” del país se convirtieron en beneficiarios, haciendo de la reforma agraria hondureña la más radical en Centroamérica en ese momento (Ruhl, 1984: 53). Aun así, solo un 3,8 por ciento de los beneficiarios fueron mujeres, uno de los niveles más bajos de participación femenina en todas las reformas agrarias latinoamericanas (Deere y León 2004: 191).

Como en el caso de la mayoría de las reformas agrarias en América Latina de este período, la hondureña afectó a pocos grandes terratenientes y se enfocó más bien en programas de colonización en tierras estatales o en “áreas vacías”, aunque muchas de estas se encontraban lejos de estar vacías y, en ocasiones, comunidades enteras fueron desalojadas para abrirle espacio a las empresas campesinas. El Valle del Aguán se convirtió en la pieza central del programa de colonización, al punto que un 31 por ciento del total de tierra distribuida en el país fue en el Bajo Aguán (Macías, 2001; Ruhl, 1984: 54). El Estado ofreció tierra expropiada de los habitantes locales o de las compañías bananeras a miles de familias con poco o ninguna tierra, de todas partes del país dentro de programas de colonización de las planicies del valle, siendo estas las tierras más fértiles; al mismo tiempo, otros campesinos establecieron asentamientos espontáneos en los cerros, que inclusive en esos tiempos eran bastante vulnerables a amenazas ambientales (Brockett, 1988; Casolo, 2009).

El Instituto Nacional Agrario (INA) creó un gran número de Empresas Asociativas Campesinas (EACs) y cooperativas, y con un préstamo de \$200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) implementó un enorme proyecto orientado

a la exportación, que terminó por convertir a los miembros de dichas cooperativas en productores de palma africana, fundamentalmente, pero también de árboles cítricos y bananos (Castro Rubio, 1994; Ruben y Fúnez, 1993). El proyecto fue fundamental para la creación de las condiciones para la expansión de la palma africana en las siguientes cuatro décadas. Esta impresionante transformación del paisaje del valle, el resultado de la llegada de flujos tanto de capital como de trabajo, difícilmente se tradujo en mejoras significativas en las vidas de las familias campesinas, tanto aquellas de las planicies como de los cerros. Dueños solo en nombre y altamente endeudados por la tierra que recibieron, las familias campesinas veían cómo la mayor parte de las ganancias por el aceite de palma eran extraídos de las cooperativas y utilizados para pagar las deudas, o simplemente desaparecían en las laberínticas redes de malversación de fondos y contaduría fraudulenta que solo era lucrativa para un grupo limitado de hombres “líderes”.

La relación entre el sector campesino y el Estado nunca fue simple. Para finales de la década de 1970, mientras la revolución convulsionaba Nicaragua, la violencia y la represión iban en escalada en El Salvador y Guatemala, el Gobierno hondureño se inscribía cada vez más en la lógica de la “Doctrina de Seguridad Nacional” de Washington, la cual sostenía que Occidente estaba atrapado en una lucha inexorable con “subversivos” tanto domésticos como internacionales, y que los movimientos izquierdistas debían ser controlados mediante vigilancia y “conflictos de baja intensidad” (Landau, 1988: 145-146; Schulz y Schulz, 1994: 73). En el Aguán, el Gobierno siguió de cerca a las empresas campesinas, reprimiendo cualquier brote que oliera a una “amenaza roja” y limitando severamente la autonomía de las cooperativas. Por ejemplo, en 1977, el ejército ocupó a la Empresa Asociativa Isletas (EACI), una importante productora bananera y encarceló a sus líderes, luego de que un grupo de asociados empezó a promover el cultivo de granos básicos y ganadería (maíz, arroz y cerdos), como una forma de adquirir algún tipo de autonomía económica con respecto a la Standard Fruit Company (Macías, 2001: 39).²²

Siguiendo la tendencia regional, para la década de los ochenta, el sector reformado se estaba estancando, sobre todo debido a la corrupción rampante y al inadecuado apoyo estatal. Para principios de los años noventa, el discurso dominante del Gobierno era que la reforma agraria había fallado y que el mercado debería de reemplazarla (Suazo, 2012). El entonces presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), refiriéndose a los beneficiarios de la reforma agraria preguntaba:

Por qué no van a vender si ha sido el trabajo y el esfuerzo de toda su vida... Yo discrepo mucho de aquellos que creen que es un retroceso de la Reforma Agraria. Al contrario, es una culminación de un proceso, en la medida que un campesino hoy puede recibir 500 mil lempiras después de un largo esfuerzo (citado en Suazo, 2012: 73)²³.

En este contexto fueron aprobadas dos leyes importantes: primero, en 1983 un masivo programa de titulación de tierras financiado por la USAID fue implementado como condición previa para el fortalecimiento de un mercado de tierras competitivo.

Segundo, en 1992 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LDMSA). Conocida popularmente como la “Ley Norton”, impulsada por el economista estadounidense Roger Norton, quien ayudó a redactarla; la LDMSA debe ser entendida dentro del contexto más amplio de ajuste estructural neoliberal en Centroamérica. Según la doctrina neoliberal, el Estado debía de abstenerse de apoyar al “ineficiente” sector campesino y promover las “ventajas comparativas” de la región, particularmente su mano de obra barata y sus recursos naturales, incluyendo la tierra. En lo que respecta a la estructura agraria, esto significaba poner el énfasis en las exportaciones por encima de la producción para el mercado interno, devaluando las monedas nacionales para hacer más competitivas las exportaciones y bajar los aranceles agropecuarios. Estas políticas públicas inundaron a los mercados locales con granos básicos, tales como arroz y maíz, provenientes de los Estados Unidos, y artificialmente baratos debido a los subsidios recibidos.²⁴ Al mismo tiempo, la liberalización del comercio agrícola dentro de Centroamérica golpeó de forma más fuerte a los productores hondureños que a los de los demás países (Rueda-Junquera, 1998).

La LDMSA vino a revertir la ley de reforma agraria de 1974, removiendo el techo de propiedad de tierra y haciendo posible que las tierras del sector reformado pudieran ser vendidas, abriendo así las puertas para un masivo proceso de contrarreforma agraria. Entre 1990 y 1994, más de la mitad de la tierra distribuida durante el período de reforma agraria fue vendida. Este número se eleva a más del 70 por ciento en el Aguán, donde más de 20 930 de las 28 365 hectáreas que fueron distribuidas inicialmente –un 73,8 por ciento– resultaron alienadas en ese mismo período (COCOCH, 2010: 24). La LDMSA permitía la titulación conjunta de marido y esposa (también para parejas que estuvieran en uniones libres reconocidas), pero en la práctica esto tuvo un efecto limitado, ya que el Estado prácticamente cesó de distribuir tierra y más bien se concentró en la titulación de las fincas ya existentes (Deere y León 1998: 379-380).

El proceso de contrarreforma agraria en el Aguán fue unas veces voluntario, otras veces violento, ya que las ya empobrecidas cooperativas y empresas campesinas, prácticamente abandonadas por el Estado, fueron “invitadas” a vender sus tierras, ya fuera por las buenas o por las malas (Macías, 2001; Ruben y Fúnez, 1993). La mayor parte de esta tierra pasó a estar concentrada en las manos de un grupo de terratenientes adinerados, de quienes Miguel Facussé y su Corporación Dinant son los más notorios (Herrera, 2011; Wilkinson, 2012). Aprovechándose de los fondos públicos de la infraestructura construida en la región durante las dos últimas décadas, así como de la existencia de una fuerza de trabajo barata y con experiencia en la producción de palma africana, constituida por miembros “liberados” y campesinos de las cooperativas con poca o sin tierra de las laderas. Así, Facussé expandió el área de tierra dedicada a la siembra de palma e invirtió en plantas procesadoras de aceite (lo mismo que otros terratenientes y las cooperativas que sobrevivieron).

Para finales de la década de 1990, el paisaje del Aguán era un gran monocultivo, con plantaciones de palma extendiéndose hasta el horizonte, y constituido por tres sectores mayoritarios: lo que quedaba de las cooperativas campesinas –“los que no vendieron”– dedicadas fundamentalmente a la producción de aceite de palma para

el mercado doméstico (aunque también exportan); los terratenientes adinerados y sus corporaciones, produciendo aceite de palma para el mercado doméstico y para exportación, fundamentalmente a México, y una masa de familias campesinas sin tierra, apenas sobreviviendo ya sea con el trabajo asalariado en las plantaciones de palma, o con los arrendatarios aferrándose a las laderas del valle.

Entre octubre y noviembre de 1998, el Huracán Mitch impactó contra la costa Caribe centroamericana. En Honduras, ya de por sí uno de los países más pobres del continente, Mitch causó gran destrucción y una significativa pérdida de vidas, lo que exacerbó las ya precarias condiciones de vida del campesinado, particularmente del sin tierra. Con muy poco apoyo del Estado y altos niveles de corrupción y malversación de los fondos de asistencia por parte de los funcionarios del Gobierno, las comunidades campesinas se vieron obligadas a depender de sus propias organizaciones –así como de la Iglesia católica– para recibir asistencia y solidaridad (Jeffrey, 2002). En el Bajo Aguán, con ayuda de la Pastoral Social, las comunidades se organizaron en Comités de Emergencia Locales (CODELES) como una forma de canalizar los fondos de ayuda provenientes de organizaciones tales como Caritas.

Estas formas de organización comunitarias se volverían cruciales en el período inmediatamente posterior a Mitch, ya que permitieron al campesinado entrar en contacto entre ellos y ganar experiencia organizativa y de acciones colectivas. De esta manera, todas las piezas parecían estar en su lugar para el inicio de un nuevo ciclo de resistencia en contra de la usurpación de tierras por las élites. En este sentido, la destrucción dejada por Mitch tuvo tres efectos fundamentales: primero, erosionó el contrato social entre el campesinado y el Estado, mostrándole al primero que para que algo fuera a cambiar deberían tomar cartas en el asunto y ponerse a la ofensiva. Segundo, el entonces presidente Carlos Roberto Flores Facussé (sobrino del terrateniente Miguel Facussé) afirmó en una conferencia de donantes en Estocolmo que el Gobierno relanzaría la reforma agraria como una manera de ayudar a los damnificados del país, lo cual abrió un espacio para que ciertos sectores simpatizantes dentro del INA, así como de la Iglesia católica, que fundamentalmente estaba a cargo de manejar los fondos de ayuda, pudieran actuar en favor del campesinado sin tierra. Finalmente, al juntar y poner en contacto a este campesinado sin tierra, se desencadenaron un conjunto de memorias de resistencia que conectaban los conflictos actuales con aquellos de la gran huelga bananera de 1954 y con la “época dorada” del movimiento campesino durante la década de los setenta. Al mismo tiempo, la crisis post-Mitch también generó un conjunto de “memorias de desposesión” en la forma de las narrativas que cuestionaban la legalidad de la venta de las tierras de la reforma agraria a principios de la década de 1990, y llamaba a revivir el “espíritu” del movimiento campesino de los setenta y a recuperar lo que consideraban que legalmente les pertenecía (Hart, 2006). Además, como Jennifer Casolo muestra, la idea de que las mujeres no hubieran vendido también tenía resonancia, al recordar tanto a hombres como a mujeres, que el trabajo femenino también había estado presente en la construcción del paisaje del Aguán y que los hombres habían orquestado muchos cambios sin el consentimiento de las mujeres (Casolo, 2009). El resultado fue una masiva ola de

recuperaciones de tierra que marcó el resurgimiento de la lucha campesina nacional y que aumentó el protagonismo de las mujeres activistas.²⁵

Una de las recuperaciones más paradigmáticas fue la que se realizó en lo que había sido el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), una base militar estadounidense creada en 1983 para entrenar a soldados centroamericanos y la “contra” nicaragüense (CEDOH, 1983). En la década de 1990, una vez cumplido su propósito, las más de cinco mil hectáreas del CREM fueron vendidas de vuelta al Estado hondureño para propósitos de reforma agraria. Sin embargo, antes de que la tierra fuera distribuida, la municipalidad de Trujillo, la vendió de forma ilegal a ganaderos y políticos locales. En 1999, en el período post-Mitch, la Pastoral Social de la ciudad de Trujillo, en conjunto con el INA y varias de las federaciones campesinas más importantes (ANACH, CNTC, ACAN, entre otras) empezó a organizar empresas campesinas con personas sin tierra de distintas partes del Valle del Aguán y los cerros circundantes.²⁶ Estas nuevas empresas, a su vez, se aliaron para formar el Movimiento Campesino del AGUAN (MCA), y el 14 de mayo del 2000, alrededor de 700 familias entraron a ocupar pacíficamente el CREM, formando así la comunidad de Guadalupe Carney.²⁷ Memorias sobre el último ciclo de desposesión claramente informaron las acciones de los ocupantes, quienes no solo exigían que aquellas y aquellos que se están uniendo a las nuevas empresas cumplieran con los criterios de la ley de reforma agraria para convertirse no solo en beneficiarios, sino también que demostraran que ellos no habían vendido sus tierras durante el período de contrarreforma, lo cual marcó en buena medida la composición del movimiento, pues la mayoría de exbeneficiarios de la reforma agraria quedaron excluidos. Estas memorias también tenían un fuerte componente de género, ya que

Seis meses después de la ocupación, la directiva de la Guadalupe Carney y la asamblea general, que en ese momento era en un 95 por ciento masculina, dieron un voto histórico. Aprobaron derechos sobre la tierra y membresía en la asamblea general para mujeres solteras a cargo de familias, títulos de propiedad conjuntos y membresía de asamblea para ambos adultos en caso de parejas y talleres de educación política y vocacional para las familias (Casolo, 2009: 408).

Durante este período, otros grupos también empezaron a organizarse y a realizar ocupaciones pacíficas para presionar al Gobierno a negociar con los grandes terratenientes y “devolver” las tierras que fueron de la reforma agraria al campesinado sin tierra organizado. Esto no fue un proceso ni simple ni tranquilo, pero un rayo de esperanza apareció en el 2008, cuando el presidente Mel Zelaya firmó el decreto de ley 18-2008, el cual le daría al MCA, así como a otras organizaciones campesinas (el Movimiento Campesino de Rigores, por ejemplo), títulos legales sobre las tierras que ocupaban. Además, antes de ser destituido tras el golpe de Estado de junio del 2009, Zelaya había alcanzado un acuerdo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) para comprar de vuelta sus tierras a Facussé.²⁸ Este impulso hacia la resolución del conflicto agrario colapsó cuando el ejército secuestró a Zelaya el 28 de junio del 2009, y lo llevó por avión a Costa Rica. Quizás queriendo mostrar la profunda

conexión que existe entre el poder político y la estructura agraria en Centroamérica, ese mismo día, el cuerpo castrense rodeó a la comunidad Guadalupe Carney para prevenir cualquier tipo de levantamiento y para dejar un mensaje claro de lo que estaba por venir.

Liderado inicialmente por Roberto Micheletti y luego por Porfirio Lobo, el régimen posgolpista respondió a la crisis agraria en el Aguán como históricamente esa zona había resuelto los problemas: mediante la militarización del valle y dándole mano libre a los terratenientes para que defendieran sus tierras de la forma que lo vieran oportuno. El resultado fue un aumento en el número de muertes violentas, con docenas de asesinatos y con los miembros de organizaciones campesinas llevando la peor parte.²⁹ Estas mismas organizaciones campesinas han sido el blanco de una campaña de criminalización y más de 200 activistas enfrentan diferentes tipos de cargos criminales. Sin embargo, las olas de violencia y represión que fueron desatadas por el golpe y realizadas conjuntamente por las fuerzas de seguridad privadas de los terratenientes, la policía y el ejército, también han fortalecido la resolución de las organizaciones campesinas por redimir las ofensas del pasado. Frases tales como “el golpe nos abrió los ojos”, “gracias al golpe nosotros los campesinos le perdimos el miedo al ejército” o “cómo nos vamos a detener después de haber perdido a tantos amigos y compañeros”, pueden ser escuchadas al hablar con las personas de las comunidades. Además, aunque esta sangrienta represión ha desacelerado la velocidad y la extensión de las “recuperaciones” de tierra, lo cierto es que estas no se han detenido, y movimientos tales como MUCA han apoyado ocupaciones de tierra en otros lugares afuera del Aguán.

De forma creciente, organizaciones internacionales de derechos humanos han estado investigando y condenando la ola de violencia en la región (Bird, 2013; Salva la Selva, 2011a). Este escrutinio ha tenido efectos internos, pues los pobladores de la zona sienten que los niveles de represión han disminuido particularmente desde la creación del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, una organización local y liderada por las comunidades campesinas mismas. En términos internacionales, en el 2011, gracias a las acciones de organizaciones tales como FIAN Internacional y Salva la Selva, la Corporación de Desarrollo Alemana (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, DEG, parte del KfW Bankengruppe) canceló un préstamo de \$20 millones dirigido a la Corporación Dinant (Salva la Selva, 2011b).

Palma Africana en el Bajo Aguán

Con estos elementos históricos en su lugar, se puede dirigir el foco a la producción de palma africana en la zona. De acuerdo con la Federación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras (FENAPALMAH), el área dedicada a este cultivo pasó de alrededor de 40 mil hectáreas en 1990 a casi 90 mil en el 2006 y a alrededor de 132 mil en el 2011 (“Productores de granos ahora cosecharán palma africana”, *La Tribuna*). El aceite de palma es actualmente el tercer producto de exportación más importante del país, por detrás del café y banano, generando unos \$300 millones en el

2013 (“Palma africana gana terreno en Honduras”, *Central America Link*). La aspiración de los productores es ampliar el área de producción a unas 650 mil hectáreas, y así hacer de Honduras el productor más importante de Latinoamérica, sobrepasando a Colombia, el país con la mayor extensión actualmente (“Honduras podría convertirse en el principal productor de palma africana”, *Proceso Digital*).

Hacia finales de la década de los veinte, la United Fruit Company empezó a experimentar con la producción de palma africana en Honduras, pero sería hasta los años setenta cuando el cultivo se consolida gracias a la inversión del Estado y los préstamos del BID. En la década de 1990, en el contexto de la contrarreforma agraria, la producción empezaría a pasar a empresas privadas con un significativo apoyo de las instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, en 2009, alrededor del momento cuando inicia el “boom” de los agrocombustibles, la IFC invirtió \$30 millones en el comercio palmero de la Corporación Dinant, la que además disfrutaba de financiamiento por parte del BID, del Banco Mundial y del BCIE (aunque algunos de estos créditos luego fueron cancelados, al igual que sucedió con el ya mencionado caso del préstamo de la DEG). Dinant también recibió créditos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto para el cambio climático (Salva la Selva, 2011a).

Se torna importante recalcar que en el Aguán no es posible hacer una diferenciación sencilla entre inversión doméstica y extranjera, además la producción de palma africana es previa al “boom” de su producción a nivel global. También, la mayor parte de su instalación e inversión ya estaba en su lugar debido a los programas de colonización y reforma agraria de 1970, y fuera del biodiesel utilizado por la flotilla de transportistas de Dinant y un plan piloto con el sistema de buses públicos en Tegucigalpa, no existe actualmente un verdadero mercado doméstico para los agrocombustibles. Además, según el vocero de Dinant, no había ningún plan para pasar a la producción de agrocombustibles en el futuro cercano.³⁰

Por otra parte, si bien la mayoría de los asesinatos en la región parecen estar vinculados directamente con la producción de palma africana, lo cierto es que no existe ninguna oposición en contra del cultivo en sí, sino más bien con respecto a quién la cosecha y cómo está siendo producida. Muchas organizaciones campesinas en la región están produciendo o planean sembrar palma africana, en detrimento en muchos casos de granos básicos tales como arroz o maíz (“Productores de granos ahora cosecharán palma africana”, *La Tribuna*). Además, desde las primeras recuperaciones de tierra a finales de los noventa, la idea de promover modelos de coinversión ha venido ganando aceptación. La idea es sencilla: las empresas de campesinos se deberían de dedicar exclusivamente a la producción de materias primas (la fruta de la palma africana), mientras que las grandes plantas procesadoras privadas se concentran en el procesamiento y mercadeo del aceite de palma. Tanto productores privados como Facussé (2011), y el Gobierno (a principios de los 2000), han promovido este modelo, el cual ha sido visto con buenos ojos por significativos sectores dentro del movimiento campesino.

Sin embargo, activistas hondureños son críticos de esta idea, ya que esta forma de producción por contrato reproduciría una dependencia parecida a la de la EACI durante los años setenta y ochenta, y que obligaría a los campesinos a asumir todos

los riesgos de producción, mientras que los empresarios privados acapararían todo el valor agregado del procesamiento (Ríos, 2010). Además, así como en otros contextos, el poder de monopsonio de las plantas procesadores les permite determinar los precios, facilitando el control por un número pequeño de intermediarios y exportadores de toda la cadena productiva (Little y Watts, 1994; Striffler, 2002). De esta manera, un “acaparamiento por control” ha ocurrido en la práctica –el control de grandes cantidades de tierra fértil para monocultivos– pero sin tener que comprar o alquilar tierra (Borras, Kay *et al.*, 2012: 404). Esto de nuevo es uno de los puntos ciegos de mucha de la literatura sobre acaparamiento de tierras.

En este punto, resulta importante enfatizar que el campesinado está no solo produciendo, sino expandiendo el área dedicada a la palma africana, por razones tanto económicas como culturales. La mayoría de las organizaciones campesinas todavía están pagando por la tierra que ocupan y la palma africana es considerada como uno de los pocos cultivos rentables en la región (rentables en términos de acceso al mercado, conocimiento de producción y apoyo financiero y técnico). Además, la producción de palma africana se ha convertido en una actividad prestigiosa en el Aguán, ya que evoca imágenes de una mejor vida, relacionada con los efectos de la reforma agraria de 1970 y 1980, así como a las imágenes de éxito que se han adherido a aquellas cooperativas (y las comunidades vinculadas a ellas) que no fueron desmanteladas a principios de la década de 1990, tales como la Cooperativa Salamá. Esto signos de estima cultural y prestigio vinculado a la palma africana se pueden observar en todo el valle: Tocoa, la ciudad principal en la región, es conocida tradicionalmente como “la ciudad de las palmeras”; el equipo de fútbol local tiene en su escudo dos grandes palmeras, y todos los años en julio Tocoa es la anfitriona del “Festival nacional palmero”, donde la “cultura palmera” es celebrada con desfiles y carrozas. En un nivel más profundo, en esta región las palmeras se han convertido en una señal de desarrollo, al punto que dos o tres de ellas pueden ser encontradas en los patios de muchas de las casas de las comunidades campesinas e inclusive en la ciudad de Tocoa. Como Derek Hall *et al.* sugieren para el Sudeste Asiático, “la legitimidad proveída por las visiones de desarrollo, modernidad [y] civilización... tienen un efecto ubicuo en los usos y exclusión de la tierra” (2011: 196).

De manera inversa, la falta de palmeras designa subdesarrollo. Cuando se les preguntó a los niños y niñas de una de las comunidades del valle sobre qué tenía su comunidad que no tuvieran otras, respondieron de forma negativa que electricidad, agua de tubo ni palmeras. Cuando se le preguntaba a la población campesina por qué preferían la palma africana a cultivos básicos tales como plátanos o arroz, además de las respuestas económicas más directamente (“porque tiene mejor precio en el mercado”), también señalaban que las palmeras son una inversión más segura, pues las inundaciones y los fuertes vientos no las pueden derribar. Entonces, el significado y el valor de sembrar palma africana trasciende una simple racionalidad económica y se relaciona también con un entendimiento ambiental del sitio, que ha sido informado por recuerdos de la devastación dejada tanto por la tormenta tropical Katrina (1999) y los huracanes Mitch (1998) y Fifi (1974), como por los miedos –infundados o no– que generan otras amenazas, tales como las inundaciones anuales y las sequías.

Estas consideraciones sugieren que los cultivos y la tierra nunca son simplemente “cosas”, sino que están profundamente imbricadas en, y resultan las manifestaciones de, relaciones sociales de poder instituidas de manera histórica en contextos particulares. Así, cultivos y tecnologías agrícolas también pueden ser símbolos que le hablan a las poblaciones rurales de su historia, de sus aspiraciones y del prometido escape de la pobreza y la dominación, aún a costas de nuevas dependencias (Bebbington, 1996: 91-92). Entender y reconstruir estas relaciones sociales es esencial para comprender por qué los cultivos específicos proliferan o desaparecen, la gama de formas productivas que conllevan y de los impactos que tienen en las poblaciones locales (Li, 2010; Gidwani, 2008). Las transacciones de tierra por sí mismas, así como ciertos tipos de cultivos, no crean situaciones totalmente nuevas de cero, con nuevas formas de producción y explotación.

Conclusiones

El acaparamiento de tierras es un fenómeno cíclico, y constituye el resultado de los procesos globales de acumulación, de la creciente demanda de ciertas mercancías, así como de procesos en el terreno donde se genera espacio tanto para el capital como para nuevos grupos sociales (por ejemplo, sectores empresariales, trabajadores y trabajadoras, poblaciones desplazadas y arrendatarios). Cuando el acaparamiento de tierras ocasiona conflictos, los resultados dependen de repertorios de resistencia y represión que son históricamente específicos. Estos, a su vez, crean las condiciones de posibilidad para futuros procesos de despojo. Argumentos sobre tierras “vacías” o “subdesarrolladas” usualmente son construcciones discursivas que se refieren a espacios en los cuales el capital aún no ha querido o no ha sido capaz de penetrar, pero no se refiere a aquellos donde no habitan personas. Una mayor historización de los acaparamientos de tierras es necesario no solo para tomar en cuenta los antecedentes o para entender los impactos, sino también para concebir cómo el presente es el resultado de disputas anteriores.

Centroamérica ha experimentado varios ciclos de acaparamiento de tierra en el período poscolonial; pues los regímenes liberales de finales del siglo XIX buscaron sobreponerse al legado económicamente sofocante de tres siglos de dominio español para modernizar la infraestructura y el sector bancario, y para transformar lo que habían sido provincias coloniales, en Estados-Nación consolidados. La creciente demanda internacional del café tuvo un gran número de impactos, entre ellos: los gobiernos buscaron construir ferrocarriles que comunicaran el interior de los países con las costas, crearon mercados de tierras y de trabajo y disciplinaron y subordinaron a las clases populares. La apropiación privada de tierras que previamente no lo eran se convirtió en la pieza central de este proyecto político y económico, aun cuando el liberalismo “frustrado” de Honduras dejó grandes extensiones de tierras municipales y estatales intactas. El liberalismo también generó nuevos grupos sociales: élites cafetaleras y comerciantes, tanto domésticas como extranjeras, trabajadores rurales proletarizados y semiproletarizados, así como “burguesías compradoras” aliadas con el capital extranjero. Al mismo tiempo, las precarias bases fiscales de los

Estados liberales los llevaron a entender las concesiones a inversionistas extranjeros tanto como una fuente esencial de ingresos, como una ruta rápida a la modernización. El primer ciclo de acaparamiento de tierras –para el café– fue entonces una precondition necesaria para el segundo, el de las plantaciones de banano. Además, la transición del primer al segundo ciclo también significó un cambio de hegemon extranjero. Mientras que los bancos británicos habían sido la fuente primordial de préstamos para los proyectos iniciales de modernización y ferroviarios de los Estados liberales, el capital financiero estadounidense se volvió cada vez más importante al paso que las empresas bananeras se consolidaron en la región.

El segundo ciclo de acaparamiento de tierras, por parte de las empresas bananeras extranjeras, reconfiguró los espacios rurales, dándole nacimiento a nuevos grupos sociales e ideologías que en Honduras cambiaron el centro económico de gravedad del interior del país a la Costa Norte. Los enclaves extranjeros alimentaron ciertas sensibilidades nacionalistas que se convirtieron tanto en la columna vertebral de los movimientos obreros y campesinos, como en una creciente conciencia de clase, tanto obrera como campesina. Por ejemplo, en el Bajo Aguán, el movimiento campesino sigue enfatizando lo “foráneo” de Facussé y de los otros grandes empresarios que usurparon las tierras de reforma agraria.

La existencia continua de tierras nacionales y municipales, inclusive a principios del siglo XXI –el resultado del liberalismo “fallido” hondureño del siglo XIX y la combatividad y tenacidad del movimiento campesino del siglo XX– tiene dos efectos que son importantes para el argumento de este ensayo. Primero, que el campesinado hondureño posee una memoria viviente de haber tenido tierra, tal vez no en la presente generación, pero sí en la de sus padres o abuelos. Segundo, en contraste con otros países centroamericanos, en Honduras el movimiento campesino siempre se ha enfocado más en la recuperación de tierras nacionales o que fueron de la reforma agraria que en la de propiedades privadas.

Finalmente, en el Aguán, los ancianos recuerdan que su situación era mejor en los 1980, cuando todavía existían las cooperativas y tanto jóvenes como ancianos observan cómo las cooperativas sobrevivientes les permitían mejores condiciones de vida a sus asociados, lo que les recuerda el mundo que perdieron y les sirve como una aspiración que anima las actuales luchas. Algunas historias circulan en las comunidades sobre cómo los líderes de las viejas cooperativas debieron escoger entre vender o ser asesinados. En algunas organizaciones (por ejemplo, el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA) la gente insiste que nunca vendieron la tierra, la cual les fue quitada ilegalmente, y muestran orgullo por ser los hijos y las hijas de los miembros de las cooperativas originales. Estas memorias han encontrado su camino hacia la organización institucional de las empresas campesinas, ya que uno de los requerimientos en las recuperaciones de tierras es no haber participado en las ventas de los años noventa. Historias vividas de desposesión y memorias de los ciclos de acaparamiento de tierra se han convertido en fuerzas materiales que afectan los desenlaces de los conflictos agrarios contemporáneos y determinan las posibilidades (o la falta de ellas) de futuros acaparamientos.

Notas

- 1 La investigación fue apoyada por la US NationalScienceFoundation (grant 1024017 para Edelman) y la Wenner-GrenFoundation para la Investigación Antropológica (grant 8594 para León). Los autores agradecen las críticas constructivas recibidas a una versión anterior de Saturnino Borrás Jr., Jefferson Boyer y Carlos Oya.
- 2 En lo que respecta a las aseveraciones sobre las “brechas de rendimiento” y la existencia de tierra sin cultivar, ver Deininger y Byerlee (2011); sobre *terranullis*, ver Milun, 2011.
- 3 Por ejemplo, en las genocidas “guerras del desierto” de la Argentina decimonónica, “desierto” no se refería a tierras áridas (algunas eran inclusive bosques húmedos, llamados el “desierto verde”), sino más bien a espacios que las élites consideraban como “geografías vacías con un enorme y durmiente potencial económico, definido por su ausencia de civilización, relaciones de mercado y presencia estatal... Estos ‘desiertos’ eran habitados por grupos indígenas armados que todavía no habían sido derrotados” (Gordillo, 2004: 46-48).
- 4 Pérez Brignoli (1985) presenta un esquema útil de las diferentes formas de definir “Centroamérica”. Para los intereses de este trabajo, se considera a la región como aquellos países que emergieron de lo que era la Centroamérica española: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Belice y Panamá son a nivel geográfico parte de la región, pero tienen historias muy distintas ya que fueron colonia británica y provincial colombiana, respectivamente. Recientes análisis de acaparamiento de tierras en Centroamérica son: Alonso-Fradejas (2012), Grandia (2013y 2012); este último presenta el tipo de perspectiva histórica por el cual se está abogando.
- 5 El informe de la FAO también incluye un estudio de Panamá, aunque los criterios para seleccionar los casos no están especificados.
- 6 La tendencia metodológicamente empobrecida de aceptar de forma acrítica la autoridad de los funcionarios estatales está ejemplificada en el estudio de caso de Costa Rica, en el cual se afirma con aprobación que “de acuerdo a [sic] la información del Ministerio de Agricultura, el fenómeno del acaparamiento de tierras no es una realidad que afecte el proceso productivo” (Tristán Donoso, 2012: 211).
- 7 Sin embargo, un discurso prevaleciente en Honduras presenta a estos inversores –particularmente a Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales– como “extranjeros”. En el caso de Facussé, dueño de la Corporación Dinant y una de las figuras más importantes detrás de la contrarreforma agraria de los 1990, este argumento se basa en su ascendencia palestina, aunque su familia lleva en el país más de un siglo (ver González, 1993: 191). Morales nació en Nicaragua, pero ha vivido en Honduras desde 1979 y su hermano Jaime Morales Carazo, también vivió en Honduras entre 1979 y 1996, y fue el vicepresidente de Daniel Ortega del 2007 al 2012. Finalmente, Reynaldo Canales tiende a ser identificado como de origen Salvadoreño. El delinear una clara distinción entre “doméstico” y “extranjero” está lleno de ambigüedades en estos casos.
- 8 Aunque las plantas procesadoras de los grandes terratenientes tienen la capacidad de producir biodiesel (ver Kerksen, 2013: 66). La literatura sobre derechos humanos tiende a asumir que la producción de palma es para agrocombustibles (Frank, 2011).
- 9 La variedad de formas de propiedad están detalladas en McCreery (1994).

- 10 Como en los ciclos de acaparamiento de tierra más recientes en distintas partes, algunas de las grandes concesiones nunca fueron puestas en producción. En 1882, un concesionario francés, que tenía un contrato para construir un canal entre los dos grandes lagos nicaragüenses, afirmaba que le habían otorgado 50 mil manzanas (34 500 hectáreas) para la producción de hule (Blanchet, 1882: 6).
- 11 Sobre regímenes alimentarios, ver Friedmann y McMichael (1989); McMichael (2012); Pritchard (2009); Winders (2009). Trabajos clave en las "economías de postres" son Mintz (1986); Jiménez (1995); Soluri (2005). El consumo de estimulantes no solo sirvió para energizar a las clases trabajadoras, sino también a la maquinaria imperial.
- 12 En términos de resúmenes generales, se puede encontrar: Gudmundson y Lindo-Fuentes (1995); Hall y Pérez-Brignoli (2003); Williams (1994).
- 13 Las excepciones a esta generalización muestran la búsqueda de objetivos similares. El régimen liberal de José Santos Zelaya, por ejemplo, protegió la industria azucarera nicaragüense de finales de siglo, aunque este fue un intento de favorecer a los aliados políticos y generar ingresos fiscales a través del monopolio de la destilación de licores (Ver Gould, 1990). El segundo tipo de ingresos más importantes para los gobiernos centroamericanos del siglo XIX, consistía de los impuestos (o las ventas y franquicias de) aguardiente y otros licores. En algunos países como Costa Rica, El Salvador y Honduras, el Estado mantenía el dominio sobre toda la producción etílica, una continuación de los estancos de la era colonial.
- 14 Entre las interpretaciones sobre el liberalismo como un proceso extremo de desposesión y acumulación primitiva, se puede encontrar a Menjivar (1980) y Torres-Rivas (1971). La historiografía más reciente, con más atención a la evidencia empírica, mantiene que el ritmo de las expropiaciones de tierra de finales del siglo XI y, principios del XX fue menos abrupto y su extensión territorial menos dramática de lo que antes se creía (Lauria-Santiago, 1999; Lindo-Fuentes, 1990).
- 15 Los liberales guatemaltecos buscaban abolir este tipo de concesión decimonónica porque la veían como una manifestación del estancamiento económico, mientras que acaparadores de tierra contemporáneos se regocijan con concesiones mucho más cortas en tiempo en lugares como Etiopía, donde toda la tierra pertenece formalmente al Estado (Lavers, 2012). Obviamente la diferencia clave se encuentra en la velocidad con la que los capitales se pueden reproducir en cada período. Hoy, una concesión mucho más corta es suficiente para recuperar una gran inversión y generar ganancias. En la Guatemala del siglo XIX, las concesiones retiraban la tierra más bien del emergente mercado de tierras.
- 16 En sus inicios, los enclaves empleaban grandes cantidades de inmigrantes caribeños de habla inglesa (ver Bourgois, 1989).
- 17 La compañía también adquirió haciendas en las tierras bajas para engordar ganado y criar mulas para las plantaciones (ver Edelman, 1992: 395-396).
- 18 Algunos analistas afirman que "la ley [de 1952] fue más moderada en casi todos los aspectos que la ley de reforma agraria mexicana que la antecede por más de una década, de hecho hubiera sido aceptable siete años después dentro de la Alianza para el Progreso (Schlesinger y Kinzer, 1983: 55).
- 19 Con respecto a los "cultivos flexibles", que tienen usos múltiples como alimento humano y animal, combustible y materia prima industrial, ver Borrás, Franco y Wang (2013: 161-179).

- 20 Algunos estimados indican que para 1985, “más de un quinto” de los beneficiarios habían abandonado sus tierras (ver Dorner, 1992: 43).
- 21 Con una extensión total de más de seis mil km², el Valle toma su nombre del Río Aguán, de una extensión de 394 km², y contiene algunas de las tierras más fértiles del país. Generalmente se le divide en tres subregiones: Alto, Medio y Bajo Aguán. En términos administrativos, el Valle del Aguán se extiende a través de los Departamentos de Colón y Yoro.
- 22 En 1974, después de que el Huracán Fifi se estrellara contra la Costa Norte del país y destruyera las plantaciones de banano, el INA y la Corporación Hondureña del Banano crearon la AEI en las tierras que pertenecían a la Standard Fruit Co. Ver Flores Valeriano (1992: 83-84) y Slutzky y Alonso (1982: 64-91). Con limitado apoyo del Estado, la AEI rehabilitó los campos bananeros y firmó varios contratos con la Standard en los cuales, a cambio de apoyo técnico y financiamiento, se comprometía a venderle toda su producción a la bananera.
- 23 En 1992, un dólar valía 5,83 lempiras.
- 24 Esto fue parte del desplazamiento más general hacia un “régimen alimentario” más flexible (ver Winders, 2009).
- 25 Debido a que las reformas liberales nunca fueron tan exitosas en Honduras como en El Salvador y Guatemala, grandes extensiones de tierras comunales y públicas sobrevivieron hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, al mismo tiempo que en estos últimos países los abolían, hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el Estado hondureño continuaba creando ejidos nuevos (Ver: Samper, 1993: 22).
- 26 ACAN es la Asociación Campesina Nacional; ANACH es la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH); y CNTC es la Central Nacional de Trabajadores del Campo.
- 27 Carney fue un sacerdote jesuita, nacido en los Estados Unidos, que durante dos décadas predicó para los pobres y ayudó a organizar cooperativas en el Aguán. Fue deportado del país en 1979 y asesinado cuatro años después, cuando se unió a una incursión guerrillera fallida en el Departamento de Olancho (ver Carney, 1985). Para una descripción de la ocupación, ver Falla (2000: 1-3).
- 28 El conflicto agrario en el Aguán, involucra a más de 13 movimientos campesinos, con raíces significativamente distintas. Por ejemplo, el MCA es el resultado de la lucha por recuperar las tierras del CREM y estuvo compuesto desde un inicio por campesinos que no estuvieron involucrados en las cooperativas de reforma agraria entre los años 1970 y 1980. MUCA, por otra parte, se origina más bien a principios de los 2000 y sus miembros se identifican a sí mismos como los hijos e hijas de quienes perdieron las tierras durante la década de 1990 (MUCA, 2010).
- 29 Es difícil dar una cifra exacta de la cantidad de personas que han perdido la vida en la región debido al conflicto agrario, ya que distintas organizaciones y medios de comunicación presentan números diferentes.
- 30 Entrevista de Andrés León con Roger Pineda, Tegucigalpa, setiembre 13, 2012.

Bibliografía

- Alonso-Fradejas, Alberto. "Land Control-grabbing in Guatemala: The Political Economy of Contemporary Agrarian Change". *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne D'études Du Développement* 33.4 (2012): 509-528.
- Amador, Freddy y Gerardo Ribbink. "El mercado de tierra en Nicaragua y el sector reformado". *Revista de Economía Agrícola* 6 (1993): 3-15.
- Argueta, Mario. *La gran huelga bananera: los 69 días que estremecieron a Honduras*. Tegucigalpa: Editorial Universitaria, 1995.
- Bebbington, Anthony. "Movements, Modernizations, and Markets: Indigenous Organizations and Agrarian Strategies in Ecuador". *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. Ed. Richard Peet y Michael Watts. London: Routledge, 1996. 86-109.
- Bird, Annie. "Human Rights Violations Attributed to Military Forces in the Bajo Aguan Valley in Honduras". 6 May 2013. <http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf>.
- Blanchet, Aristide-Paul. *Le caoutchouc: son emploi, sa production naturelle & sa plantation au Nicaragua: création d'une compagnie pour son exploitation*. Paris: Librairie Jules Lecuir, 1882.
- Blokland, Cornelis. *Participación campesina en el desarrollo económico: la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua durante la revolución sandinista*. Doetinchem: Paulo Freire Stichting, 1992.
- Borras, Saturnino M., Cristóbal Kay, et al. "Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America". *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne D'études Du Développement* 33, 4 (2012): 402-416.
- Borras, Saturnino M., Jennifer C. Franco, et al. "Land Grabbing in Latin America and the Caribbean". *Journal of Peasant Studies* 39. 3-4 (2012): 845-872. 20 Jun. 2012.
- Borras, Saturnino M., Jennifer C. Franco y Chunyu Wang. "The Challenge of Global Governance of Land Grabbing: Changing International Agricultural Context and Competing Political Views and Strategies". *Globalizations* 10, 1 (2013): 161-179.
- Bourgois, Philippe I. *Ethnicity at Work: Divided Labor on a Central American Banana Plantation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.
- Brockett, Charles. "Public Policy, Peasants, and Rural Development in Honduras". *Journal of Latin American Studies* 19.1 (1988): 69-86.
- Bucheli, Marcelo. "United Fruit Company in Latin America". *Banana Wars: Power, Production, and History in the Americas*. Ed. Steve Striffler & Mark Moberg. Durham: Duke University Press, 2003. 80-100.
- Bulmer-Thomas, Victor. *The Economic History of Latin America Since Independence*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Cardoso, Ciro F. S. "Historia económica del café en Centroamérica (siglo XIX): Estudio comparativo". *Estudios Sociales Centroamericanos* 10 (1975): 9-55.
- Carney, J. Guadalupe. *To Be a Revolutionary: An Autobiography*. San Francisco: Harper y Row, 1985.
- Carrera C., Jaime Arturo y Jaime Luis Carrera Campos. "El caso de Guatemala". *Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización*. Ed. Fernando Soto Barquero y Sergio Gómez. Rome: FAO, 2012. 253-284. <http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/mercado_tierra_alc.pdf>.

- Casey Gaspar, Jeffrey. *Limón 1880-1940: un estudio de la industria bananera en Costa Rica*. San José: Editorial Costa Rica, 1979.
- Casolo, Jennifer. "Gender Levees: Rethinking Women's Land Rights in Northeastern Honduras". *Journal of Agrarian Change* 9.3 (2009): 392-420.
- Castellanos Cambranes, Julio. *Coffee and Peasants in Guatemala: The Origins of the Modern Plantation Economy in Guatemala, 1853-1897*. Stockholm: Institute of Latin American Studies, 1985.
- Castro Rubio y Ángel Augusto. *Un plan de desarrollo: el Bajo Aguán en Honduras*. México, D. F.: Universidad Iberoamericana, 1994.
- CEDOH. "Instalado el CREM". *Boletín Informativo Centro de Documentación de Honduras* Jun. 1983 1, 4-5.
- COCOCH. "Reforma Agraria, Agricultura y medio Rural en Honduras: La agenda Pendiente del Sector Campesino". 2010. <http://www.landcoalition.org/pdf/08_COCOCH_Reforma_Agraria_en_Honduras.pdf>.
- Deere, Carmen Diana y Magdalena León. "Gender, Land and Water: From Reform to Counter-reform in Latin America". *Agriculture and Human Values* 15.4 (1998): 375-386.
- _____. "Revertir la reforma agraria con exclusión de género: lecciones a partir de América Latina". *El Otro Derecho* 31-32 (2004): 181-219.
- Deininger, Klaus W. y Derek Byerlee. *Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington, D. C.: World Bank, 2011. 10 Jan. 2012. <http://site-resources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf>.
- Dore, Elizabeth. "Property, Households and Public Regulation of Domestic Life: Diriomo, Nicaragua 1840-1900". *Journal of Latin American Studies* 29.3 (1997): 591-611.
- Dorner, Peter. *Latin American Land Reforms in Theory and Practice: a Retrospective Analysis*. Madison: University of Wisconsin Press, 1992.
- Dosal, Paul J. *Doing Business with the Dictators: a Political History of United Fruit in Guatemala, 1899-1944*. Wilmington: SR Books, 1993.
- Edelman, Marc. "Illegal Renting of Agrarian Reform Plots: A Costa Rican Case Study". *Human Organization* 48, 2 (1989): 172-180.
- _____. "Messy Hectares: Questions About the Epistemology of Land Grabbing Data". *Journal of Peasant Studies* 40.3 (2013): 485-501.
- _____. *The Logic of the Latifundio: The Large Estates of Northwestern Costa Rica Since the Late Nineteenth Century*. Stanford: Stanford University Press, 1992.
- Euraque, Darío A. *Reinterpreting the Banana Republic: Region and State in Honduras, 1870-1972*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996.
- Falla, Ricardo. "Honduras: Una toma de tierras abre puertas a la reforma agraria". *Envío* Sep. 2000 1-3.
- Flores Valeriano, Enrique. *La explotación bananera en Honduras*. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 1987.
- Frank, Dana. "WikiLeaks Honduras: US Linked to Brutal Businessman". *The Nation* 21 Oct. 2011. 10 Jun. 2013. <<http://www.thenation.com/article/164120/wikileaks-honduras-us-linked-brutal-businessman#axzz2YZGRvb3q>>.
- Friedmann, Harriet y Philip McMichael. "Agriculture and the State System: The Rise and Decline of National Agricultures, 1870 to the Present". *Sociologia Ruralis* 29.2 (1989): 93-117.

- Gidwani, Vinay K. *Capital, Interrupted Agrarian Development and the Politics of Work in India*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
- Gómez, Sergio. "Acaparamiento de tierras. Reflexiones sobre la dinámica reciente del mercado de la tierra en América Latina". Oct. 2011. 2 Jan. 2013. <<http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/estudios/gomez.pdf>>.
- González, Nancie L. *Dollar, Dove, and Eagle: One Hundred Years of Palestinian Migration to Honduras*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993.
- Gordillo, Gastón. *Landscapes of Devils: Tensions of Place and Memory in the Argentinean Chaco*. Durham, NC: Duke University Press, 2004.
- Gould, Jeffrey L. *To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the Myth of Mestizaje, 1880-1965*. Durham: Duke University Press, 1998.
- . *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1990.
- Gould, Jeffrey L. y Aldo Lauria-Santiago. *To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-1932*. Durham: Duke University Press, 2008.
- Grandia, Liza. *Enclosed: Conservation, Cattle, and Commerce Among the Q'eqchi' Maya Lowlanders*. Seattle: University of Washington Press, 2012.
- . "Raw Hides: Hegemony and Cattle in Guatemala's Northern Lowlands". *Geoforum* 40.5 (2009): 720-731.
- . "Road Mapping: Megaprojects and Land Grabs in the Northern Guatemalan Lowlands". *Development and Change* 44.2 (2013): 233-259.
- Gudmundson, Lowell. "Lord and Peasant in the Making of Modern Central America". *Agrarian Structure & Political Power: Landlord & Peasant in the Making of Latin America*. Ed. Evelyne Huber y Frank Safford. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995. 151-176.
- . "The Expropriation of Pious and Corporate Properties in Costa Rica, 1805-1860: Patterns in the Consolidation of a National Elite". *The Americas* 39.3 (1983): 281-303.
- Gudmundson, Lowell y Héctor Lindo-Fuentes. *Central America, 1821-1871: Liberalism before Liberal Reform*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1995.
- Hall, Carolyn y Héctor Pérez Brignoli. *Historical Atlas of Central America*. Norman: Univ. of Oklahoma Press, 2003.
- Hall, Derek, Philip Hirsch y Tania Murray Li. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2011.
- Handy, Jim. *Gift of the Devil: a History of Guatemala*. Boston: South End Press, 1984.
- Hart, Gillian. "Denaturalizing Dispossession: Critical Ethnography in the Age of Resurgent Imperialism". *Antipode* 38.5 (2006): 978-1004.
- Herrera, Hugo. "¿Quién es Miguel Facussé?". *Socialismo o Barbarie Honduras* Oct. 2011. 30 Jan. 2013. <http://www.sobhonduras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3Aiquien-es-miguel-facusse&catid=63%3Aets-85&Itemid=66>.
- Honduras Poder Legislativo. "Decreto número 31-92, Ley para la modernización y el desarrollo del sector agrícola". 1992. <<http://www.honduraslegal.com/legislacion/legi104.htm>>.
- Huggins, Chris. "A Historical Perspective on the 'Global Land Rush'". Jan. 2011. 14 Mar. 2012. <http://www.landcoalition.org/sites/default/files/publication/904/HUGGINS_History_web_11.03.11.pdf>.

- Immerman, Richard H. *The CIA in Guatemala: The Foreign Policy of Intervention*. Austin: University of Texas Press, 1988.
- Jeffrey, Paul. "Una mirada introspectiva: La respuesta al huracán Mitch en el Valle del Bajo Aguán". *Descifrando a Honduras: Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch*. Ed. Manuel Torres Calderón et al. Cambridge, MA: Hemisphere Initiatives, 2002. 44-57. <<http://lanic.utexas.edu/project/hemisphereinitiatives/honduras.pdf>>.
- Jiménez, Michael J. "'From Plantation to Cup': Coffee and Capitalism in the United States, 1830-1939". *Coffee, Society, and Power in Latin America*. Ed. William Roseberry, Lowell Gudmundson y Mario Samper Kutschbach. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995. 38-64.
- Jonakin, Jon. "Agrarian Policy". *Nicaragua Without Illusions: Regime Transition and Structural Adjustment in the 1990s*. Ed. Thomas W. Walker. Wilmington: SR Books, 1997. 97-113.
- Kerssen, Tanya M. *Grabbing Power: The New Struggles for Land, Food and Democracy in Northern Honduras*. Oakland, C. A.: Food First Books, 2013.
- Landau, Saul. *The Dangerous Doctrine: National Security and U.S. Foreign Policy*. Boulder: Westview Press, 1988.
- Lauria-Santiago, Aldo. *An Agrarian Republic: Commercial Agriculture and the Politics of Peasant Communities in El Salvador, 1823-1914*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999.
- Lavers, Tom. "'Land Grab' as Development Strategy? The Political Economy of Agricultural Investment in Ethiopia". *Journal of Peasant Studies* 39.1 (2012): 105-132.
- LeGrand, Catherine C. "Living in Macondo: Economy and Culture in a United Fruit Company Banana Enclave in Colombia". *Close Encounters of Empire: Writing the Cultural History of U.S.-Latin American Relations*. Ed. Gilbert M. Joseph, Catherine C. Le Grand y Ricardo Donato Salvatore. Durham, N. C.: Duke University Press, 1998. 333-368.
- Li, Tania Murray. "Centering Labor in the Land Grab Debate". *Journal of Peasant Studies* 38. 2 (2011): 281-298.
- . "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations". *Antipode* 41.s1 (2010): 66-93.
- Lindo-Fuentes, Héctor. "Consecuencias económicas de la independencia en Centroamérica". *La Independencia americana: consecuencias económicas*. Ed. Leandro Prados de la Escosura y Samuel Amaral. Madrid: Alianza Editorial, 1993. 54-79.
- . *Weak Foundations: The Economy of El Salvador in the Nineteenth Century*. Berkeley: University of California Press, 1990.
- Little, Peter D. y Michael Watts. *Living Under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa*. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.
- Luna, Pablo F. "Latifundia, haciendas et landgrabbing, en perspective historique". *Histoire(s) de l'Amérique latine* 8 (2013): 1-8.
- MacCameron, Robert. *Bananas, Labor, and Politics in Honduras: 1954-1963*. Syracuse, N. Y.: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1983.
- Macías, Miguel Alonzo. *La capital de la contrarreforma agraria: el Bajo-Aguán de Honduras*. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 2001.
- Mahoney, James. *The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America*. Baltimore; London: Johns Hopkins University Press, 2001.
- Mallon, Florencia. "Economic Liberalism: Where We Are and Where We Need to Go". *Guiding the Invisible Hand: Economic Liberalism and the State in Latin American History*. Ed. Joseph L. Love y Nils Jacobsen. New York: Praeger, 1988. 177-186.

- Martí i Puig, Salvador. *Tiranías, rebeliones y democracia: itinerarios políticos comparados en Centroamérica*. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2004.
- McCreery, David. *Rural Guatemala, 1760-1940*. Stanford: Stanford University Press, 1994.
- McMichael, Philip. "The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring". *Journal of Peasant Studies* 39.3-4 (2012): 681-701.
- Melville, Thomas y Marjorie Melville. *Guatemala: The Politics of Land Ownership*. New York: Free Press, 1971.
- Menjívar, Rafael. *Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador*. San José: EDUCA, 1980.
- Meza, Víctor et al. *Honduras: poderes fácticos y sistema político*. Tegucigalpa: Centro de Documentación de Honduras, 2008.
- Milun, Kathryn. *The Political Uncommons: The Cross-cultural Logic of the Global Commons*. Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2011.
- Mintz, Sidney W. *Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History*. New York: Penguin Books, 1986.
- Moberg, Mark y Steve Striffler. "Introduction". *Banana Wars: Power, Production, and History in the Americas*. Ed. Steve Striffler y Mark Moberg. Durham: Duke University Press, 2003. 1-19.
- Montoya, Aquiles. *El agro salvadoreño antes y después de la reforma agraria*. San Salvador: DIES-CENITEC, 1991.
- MUCA. *Machete de esperanza*. Tocoa, Honduras: Movimiento Unificado Campesino del Aguán, 2010.
- Núñez Soto, Orlando. *La economía popular asociativa y autogestionaria*. Managua: CIPRES, 1995.
- Oya, Carlos. "Methodological Reflections on 'land Grab' Databases and the 'land Grab' Literature 'rush'". *Journal of Peasant Studies* 40.3 (2013): 503-520.
- Pérez Brignoli, Héctor. *Breve historia de Centroamérica*. Madrid: Alianza Editorial, 1985.
- Posas, Mario. *Autogestión en el agro: el caso de la Empresa Asociativa Isletas*. Tegucigalpa: Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 1992.
- _____. *El movimiento campesino hondureño: una perspectiva general*. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 1981.
- _____. *Luchas del movimiento obrero hondureño*. San José: Editorial Universitaria Centroamericana, 1981.
- Pritchard, Bill. "The Long Hangover from the Second Food Regime: a World-historical Interpretation of the Collapse of the WTO Doha Round". *Agriculture and Human Values* 26.4 (2009): 297-307.
- Ríos, Gilberto. "El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo". *FIAN Honduras* 18 Jun. 2010. 11 Jun. 2013. <http://www.fian.hn/v1/index.php?option=com_k2&view=item&id=26:el-conflicto-agrario>FirefoxHTML\Shell\Open\Command>.
- Robinson, William I. *Transnational Conflicts: Central America, Social Change and Globalization*. London: Verso, 2003.
- Robleda Castro, Agapito. *40 años después: la verdad de la huelga de 1954 y de la formación del SITRATERCO*. Tegucigalpa: Ediciones del SEDAL, 1995.
- Román Vega, Isabel y Roy Rivera Araya. *Tierra con fronteras (Treinta años de política de distribución de tierras en Costa Rica)*. San José: CEPAS, 1990.
- Ronsbo, Henrik. "State Formation and Property: Reflections on the Political Technologies of Space in Central America". *Journal of Historical Sociology* 10.1 (1997): 56-73.

- Ruben, Raúl y Francisco Fúnez. *La compra-venta de tierras de la reforma agraria*. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 1993.
- Rueda-Junquera, Fernando. "Regional Integration and Agricultural Trade in Central America". *World Development* 26.2 (1998): 345-362.
- Ruhl, J. Mark. "Agrarian Structure and Political Stability in Honduras". *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 26.1 (1984): 33-68.
- Salva la Selva. "Acción terminada - gobierno británico y ¿derechos humanos?: comercio de carbono ensangrentado en Honduras". *Salva la Selva* 4 May 2011. 11 Jul. 2013. <<https://www.salvalaselva.org/mailalert/691/gobierno-britanico-y-derechos-humanos-comercio-de-carbono-ensangrentado-en-hondurasFirefoxHTML%5CShell%5COpen%5CCommand>>.
- . "Honduras: instituciones retiran apoyo financiero a la expansión sangrienta de la palma". *Salva la Selva* 26 Apr. 2011. 17 Jun. 2013. <<http://www.salvalaselva.org/exitos/3502/honduras-instituciones-retiran-apoyo-financiero-a-la-expansion-sangrienta-de-la-palma>>.
- Samper, Mario. "Café, trabajo y sociedad en Centroamérica, (1870-1930): una historia común y divergente". *Historia general de Centroamérica*. Ed. Víctor H. Acuña Ortega. Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario & FLACSO, 1993. 11-110.
- Schlesinger, Stephen C. y Stephen Kinzer. *Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala*. Garden City, N. Y.: Anchor Books, 1983.
- Schulz, Donald E. y Deborah Sundloff Schulz. *The United States, Honduras, and the Crisis in Central America*. Boulder: Westview Press, 1994.
- Segovia, Alexander. "Centroamérica después del café: el fin del modelo agroexportador tradicional y el surgimiento de un nuevo modelo". *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales* 1.2 (2004): 5-38.
- . "Integración real y grupos centroamericanos de poder económico. Implicaciones para la democracia y el desarrollo regional". *Estudios Centroamericanos* 61.691-692 (2006): 517-582.
- Sierra Mejía, Marcio y Manuel Ramírez Mejía. "El papel del Estado en el desarrollo del sector rural de Honduras hacia el año 2000". *¿Estado o mercado? Perspectivas para el desarrollo agrícola centroamericano hacia el año 2000*. Ed. Hugo Noé Pino, Pedro Jiménez y Andy Thorpe. Tegucigalpa: POSCAE-UNAH, 1994. 53-76.
- Slutzky, Daniel y Esther Alonso. *Empresas transnacionales y agricultura: el caso del enclave bananero en Honduras*. Tegucigalpa: Editorial Universitaria, 1982.
- Soluri, John. *Banana Cultures: Agriculture, Consumption and Environmental Change in Honduras and the United States*. Austin: University of Texas Press, 2005.
- Soto Baquero, Fernando y Sergio Gómez. *Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización*. Rome: FAO, 2012. <http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/mercado_tierra_alc.pdf>.
- Stern, Steve J. "The Decentered Center and the Expansionist Periphery: The Paradoxes of Foreign-local Encounter". *Close Encounters of Empire: Writing the Cultural History of U.S.-Latin American Relations*. Ed. Gilbert M. Joseph, Catherine LeGrand y Ricardo Donato Salvatore. Durham: Duke University Press, 1998. 47-68.
- Striffler, Steve. *In the Shadows of State and Capital: The United Fruit Company, Popular Struggle, and Agrarian Restructuring in Ecuador, 1900-1995*. Durham, NC: Duke University Press, 2002.

- Suazo, Javier. *Honduras: ¿30 años de política agraria en democracia?* Tegucigalpa: Asociación Hondureña de Desarrollo e Investigación Económica (ASOHDEICO), 2012.
- Thiesenhusen, William C. *Broken Promises: Agrarian Reform and the Latin American Campesino*. Boulder: Westview Press, 1995.
- Thorpe, Andy et al. *El impacto del ajuste en el agro hondureño*. Tegucigalpa: POSCAE-UNAH, 1995.
- Torres-Rivas, Edelberto. *Interpretación del desarrollo social centroamericano*. San José: EDUCA, 1971.
- Tristán Donoso, Santander. "El caso de Costa Rica". *Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización*. Ed. Fernando Soto Baquero y Sergio Gómez. Rome: FAO, 2012. 209–230. <http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/mercado_tierra_alc.pdf>.
- Wagner, Regina. *Historia del café de Guatemala*. Bogotá: Villegas Editores, 2001.
- Wilkinson, Tracy. "In Honduras, a Controversial Tycoon Responds to Critics". *Los Angeles Times* 21 Dec. 2012. 23 Dec. 2012. <<http://articles.latimes.com/2012/dec/21/world/la-fg-honduras-facusse-20121221>>.
- Williams, Robert G. *States and Social Evolution: Coffee and the Rise of National Governments in Central America*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994.
- Wily, Liz Alden. "Enclosure Revisited: Putting the Global Land Rush in Historical Perspective". *Handbook of Land and Water Grabs in Africa: Foreign Direct Investment and Food and Water Security*. Ed. Tony Allan et al. Abingdon, United Kingdom: Routledge, 2012. 11-23.
- Winders, Bill. "The Vanishing Free Market: The Formation and Spread of the British and US Food Regime". *Journal of Agrarian Change* 9.3 (2009): 315-344.
- Wong, Rosie. "The Oxygen Trade: Leaving Hondurans Gasping for Air". *Foreign Policy in Focus* 18 Jun. 2013. 19 Jun. 2013. <http://www.fpiif.org/articles/the_oxygen_trade_leaving_hondurans_gasping_for_air?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FPIF+%28Foreign+Policy+In+Focus+%28All+News%29%29>.

Marc Edelman. Estadounidense, cuenta con un doctorado en antropología por Columbia University. Es profesor de antropología en Hunter College y en el Programa Doctoral de Antropología, ambos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Es autor de *La lógica del latifundio* (1998) y *Campesinos contra la globalización* (2005), y co-autor de *Social Democracy in the Global Periphery* (2007) y *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements* (2015).

Contacto: medelman@hunter.cuny.edu

Andrés León Araya. Costarricense. Candidato doctoral en antropología de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), docente en la Escuela de Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en su trabajo de tesis sobre la relación entre conflicto agrario, poder político y la monocultura de la palma africana en el norte de Honduras.

Contacto: a.leonaraya@gmail.com